

18ª REUNION — Continuación de la 13ª SESION ORDINARIA (Especial)  
AGOSTO 2 Y 3 DE 1973

Presidencia de los señores diputados Salvador F. Busacca e Isidro J. Odena

Secretarios: doctor Alberto L. Rocamora y señor Ludovico Lavia

Prosecretario: señor Manuel Rodríguez González

En ejercicio del Poder Ejecutivo  
nacional:

RAÚL ALBERTO LASTIRI

DIPUTADOS PRESENTES:

ACEVEDO, Carlos Luis  
ACUÑA, Hipólito  
AGUIRRE, Mario D.  
AGUIRRE de SAIBENE, Luisa E.  
ALVAREZ GUERRERO, Osvaldo  
AMADO SALEME, José  
AMAOLO, Mario O.  
AMAYA, Mario Abel  
AMERISE, José Carmelo  
ARAGONÉS, Carlos Osvaldo  
ARANA, Tomás Pedro  
ARATA, Juan Carlos  
ARBO, Tomás Ameghino  
ARCE, Rodolfo Juvenelo  
ARIANI, Adriano  
ARIGÓS, Ramón Eduardo  
ARRAYA, Jorge Francisco  
ARRÚE, Wilbrodo  
ASMAR, Ramón  
AUYERO, Carlos Alberto Camilo  
AVILA, Agustín Alfredo  
AZUEMENDI, Ernesto  
BALESTRA, Ricardo Ramón  
BARBARO, Julio D.  
BARRIONUEVO, Roque R.  
BÉHERAN, Arnoldo Mario  
BELLISIO, Victorio Alberto  
BENEDETTI, Osvaldo Ernesto  
BLANCO, Manuel  
BONAS, Abraham Efraín  
BONIFATTI, Arolinda S. A.  
BORRÁS, Raúl Antonio  
BRAVO, Carlos Alberto  
BRAVO, Federico S.  
BRITO LIMA, Alberto  
BUSACCA, Salvador F.  
BUSTOS, Tomás Roberto  
CABANA, Manuel I.  
CABEZAS, José Humberto  
CALABRESE, Pablo  
CAMPBELL, Oscar S.  
CAMUS, Jorge M.  
CAPILLO, José  
CARDENAS, Juan Carlos  
CARRAL TOLOSA, Humberto  
CARRERAS, Ruperto R.  
CASAZZA, Luis Ángel  
CATALANO, José Armando  
CITATI, Ángel  
COLELLO, Clemente J.

COSSY ISASI, Edgar  
COSTARELLI, José  
CROATTO, Armando Daniel  
CROCCO, Luis Ferdinando  
CHAQUIREZ de PALACIOS, María  
D'ANGELO, Lorenzo Francisco  
DAVICO, Miguel Ángel  
DAY, Alberto Ricardo  
DE APARICI, Ricardo José Manuel  
DE LUCA, Ricardo  
DESPERBASQUES, Rodolfo Eduardo  
DÍAZ ORTIZ, Santiago Francisco  
EGUIREUN, Enrique  
ESPECHE, Juan Bautista  
ESPONDABURU, Raúl Horacio  
ESQUIVEL, Faustino  
ESTIGARRIA, Agustín Tomás  
FADUL de SOBRINO, Esther Mercedes  
FALABELLA, Francisco José  
FALÚ, Ricardo Munir  
FARIAS, Eduardo Isidro  
FERNÁNDEZ, Dante Dionisio  
FERNÁNDEZ BEDOYA, Mariano  
FERNÁNDEZ GILL, Guillermo Carlos  
FERNÁNDEZ VALONI, José Luis  
FERREYRA, Jorge Washington  
FLORES, José María F.  
FONTE, Carlos A.  
FRANCO, Hugo Armando  
FRESCHI, Pedro José  
FUENTES, Pedro Alfredo  
GAITÁN, Adelmo Alberto  
GALVÁN, Raúl Alfredo  
GALLO, Carlos R.  
GANEM, Héctor  
GARCIA, Luis Antonio  
GARONA, Alberto A.  
GARRE, Nilda Celia  
GASS, Adolfo  
GIMÉNEZ, Nicolás Alberto  
GLELLEL, Jorge  
GOLE, Tomás Juan B.  
GONZÁLEZ, Ricardo A.  
GRAU, Mario Agustín  
GUALCO, Jorge Nelson  
GUERRERO, Antonio Isaac  
GUZMÁN de ANDREUSSI, María Cristina  
HAIEK, José  
HARRINGTON, Luis José D.  
HUEYO, Horacio  
IMBAUD, Carlos Alfredo  
INSÚA, Carlos Raúl  
ITURRIETA, Aníbal A.  
KELLY, Rodolfo Feliciano  
KUNKEL, Carlos Miguel  
LABAKE, Juan Gabriel

LATRUBESSE, Francisco Alberto  
LAVALLE, Mario  
LAZZARINI, José Luis  
LENCINA, Luis A.  
LÉPEZ, Lysis Augusto  
LIMA, Hugo Ramón  
LITERAS, María Haydée A. de  
LÓPEZ, Domingo  
LÓPEZ, Horacio Fidel  
LÓPEZ, Miguel Ángel  
LÓPEZ de GALLO, Amelia  
LORENCES, Mariano Rufino  
LUCENA, Luis Arnaldo  
LUMELLO, José Erio  
LLANO, Juan Pedro  
LLORENS, Roberto Oscar  
MACRIS, Antonio J.  
MALDONADO, Clemente  
MARINO, Rafael Francisco  
MARQUEZ, Alfonso Carlos  
MARTÍNEZ, Juan Antonio  
MARTÍNEZ, Pedro Nicolás  
MARTOS, Mario Saúl  
MASSOLO, Eduardo A. R.  
MAUHUM, Fernando Hugo  
MERA FIGUEROA, Julio I.  
MERCHENSKY, Marcos  
MIGLIOZZI, Julio Alberto  
MIGUEL, Pedro Honorio  
MIRA, Jesús  
MOLINA, Gilberto H.  
MOLINA, Manuel Isauro  
MOLINA ZAVALÍA, Armando  
MOLINARI ROMERO, Manuel Ernesto  
MOMBELLI, Fausto J.  
MÓNACO, Horacio Miguel  
MONSALVE, Evaristo A.  
MONTERO TELLO, Régulo L.  
MORAL, Ángel  
MORENO, Antonio E.  
MORENO FERRER, José Carlos W.  
MORINI, María Teresa Merciadri de  
MOYANO, Francisco J.  
MUNIZ BARRETO, Diego  
MUSACCHIO, Vicente Miguel  
MUSSO, Eufemia  
NARANJO, Decio B.  
NATALE, Ricardo T.  
NICOLICHE, Lisardo Oscar  
NOSIGLIA, Plácido Enrique  
ODENA, Isidro J.  
OSELLA MUÑOZ, Enrique Emilio  
PALACIO DEHEZA, Carlos  
PARENTE, Rodolfo Domingo  
PASCUAL, Paulino Rubén  
PATALAGOITIA, Osvaldo E.  
PAZ, Guido Ulises

PEDRINI, Ferdinando  
 PEREIRA, Antonio  
 PETRUCELLI, Agustín  
 PONCE, Rodolfo Antonio  
 PORTERO, Héctor  
 PORTO, Jesús E.  
 RABANAL, Rubén Francisco  
 RACCHINI, Juan Nicolás  
 RAFAEL, Juan  
 RAMÍREZ, Juan Manuel  
 RATTI, Luis Carlos  
 RITVO, Miguel  
 RIZO, Eusebio Victor  
 RODRÍGUEZ, Alfredo S.  
 RODRÍGUEZ FLORES, Argentina  
 ROJAS, Ramón Pablo  
 ROLANDO, Esteban Domingo  
 ROMAN, Irene Graciela  
 ROMERO, Carlos Alberto  
 ROMERO, Juana N.  
 ROSAS, Alberto Horacio  
 ROTA, Silvana María I.  
 RUBEO, Luis  
 RUIZ VILLANUEVA, Arturo  
 SALIM, Luis  
 SALOMÓN, Jorge  
 SALVADOR, Nicolás  
 SALVATIERRA, Julio Domingo  
 SAMBUEZA, Osvaldo

SÁNCHEZ AHUMADA, Luis Alberto  
 SÁNCHEZ TORANZO, Nicasio  
 SANDLER, Héctor Raúl  
 SANGIACOMO, Ricardo Arturo  
 SANGUINETI, Virginia Luisa  
 SARBOLI, Rubén Juan  
 SARLI, Osvaldo Raúl  
 SAÚL, Roberto  
 SERVINI GARCÍA, Clara Cristina  
 SILEONI, Nelo I.  
 SILVA, Anacleto  
 SLAMOVITS, Ludovico  
 SOBRINO ARANDA, Luis Alberto  
 SOLANA, Jorge D.  
 STECCO, Alberto Eleodoro  
 SUÁREZ, Humberto F.  
 SUÁREZ, Leopoldo M.  
 SUELDO, Horacio Jorge  
 SULETA DE ARRAYA, Arminda  
 SVRSEK, Enrique A.  
 TACHELLA, Eliberto S. J.  
 TAGLIAFERRO, Jorge  
 TOLLER, Roberto Lino  
 TRABOULSI, Eduardo Elías  
 TRÓCCOLI, Antonio A.  
 TULA DURÁN, Joaquín  
 URDÍNEZ DE VOLPE, Clotilde Isolina  
 VACCAREZZA, Eduardo H.  
 VALENZUELA, Héctor R.

VALERI, Salvador  
 VAZQUEZ POL, José  
 VERGARA, Roque Antonio  
 VESCO, José Luis  
 VIALE, Jorge Omar  
 VIDANA, Roberto  
 VILLALBA, Bernardo Samuel  
 VINARDELL MOLINERO, Miguel  
 VINTI, Carmelo  
 VITTAR, Rodolfo Oscar  
 ZAMANILLO, José Miguel  
 ZAPATA, Hipólito Bernardo

#### AUSENTES, CON LICENCIA:

BARTOMIOLI, Héctor Luis  
 CASTELLANO, Hugo Luis  
 COMINGUEZ, Juan Carlos

#### AUSENTES, CON AVISO:

BAJCZMAN, Raúl I.  
 CAMPOS, Ernesto Manuel  
 FERNÁNDEZ, Juan Máximo  
 HUGHES, Gilbert  
 MASTOLORENZO, Vicente

#### AUSENTE, CON PERMISO:

VILLADA, Mario Anselmo

## SUMARIO

- 1.—Termina la consideración del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas en el proyecto de ley en revisión sobre radicación de capitales extranjeros. Se sanciona (Pág. 1298.)
- 2.—Consideración del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales y de Finanzas en el proyecto de ley en revisión sobre nacionalización de entidades bancarias. Se sanciona definitivamente. (Página 1324.)
- 3.—Consideración del despacho de las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre fomento agrario. Se sanciona. (Pág. 1345.)
- 4.—Autorización a la Presidencia de la Honorable Cámara para enviar al Poder Ejecutivo las comunicaciones correspondientes inmediatamente después de cada sanción definitiva. (Pág. 1390.)
- 5.—Apéndice:

Sanciones de la Honorable Cámara. (Pág. 1390.)

—En Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto de 1973, a la hora 9 y 45:

### 1

#### RADICACION DE CAPITALES EXTRANJEROS

Sr. Presidente (Busacca). — Continúa la sesión.

Prosigue la consideración del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Fi-

nanzas en el proyecto de ley sobre régimen para la radicación de capitales extranjeros (1).

Tiene la palabra el señor diputado Arana.

Sr. Arana. — Señor presidente: continuando con el análisis del proyecto de ley sobre régimen para la radicación de capitales extranjeros, dejo señalado que el bloque de la Alianza Popular Revolucionaria, cuando se discutió en general el conjunto de medidas económicas enviado por el Poder Ejecutivo, adelantó su criterio de apoyar la sanción de este dispositivo legal.

Lo cierto del caso es que la ley de radicación de capitales extranjeros configura un viejo problema que el país viene debatiendo a través de distintas disposiciones legales desde el año 1953, fecha en que se votó la ley que lleva el número 14.222.

Todos los países en vías de desarrollo necesitan naturalmente mantener una fuerte inversión de capital a los efectos de satisfacer las necesidades de su propio desarrollo. Estas necesidades, que se van acrecentando a medida que el proceso de desarrollo plantea mayores requerimientos en materia de inversiones, pueden ser cubiertas con los propios recursos que genera cada uno de estos países, y que, por regla general, resultan insuficientes.

Esa insuficiencia trata de compensarse con las inversiones externas, con el fin de completar los requerimientos de aquellos sectores a los cuales el capital nacional no puede aportar los recursos indispensables para alcanzar las pautas que cada uno de los países se ha fijado como meta de su propio desarrollo.

(1) Véase el Diario de Sesiones del 1º de agosto de 1973, pág. 1252.

Este problema ha provocado en la Argentina un fenómeno que tiene características históricas desde el punto de vista económico y que nos lleva a decir que el desarrollo del país está virtualmente vinculado a las disponibilidades de divisas con que ha contado en cada uno de los ciclos que son fácilmente detectables en las tasas de crecimiento interno. Tanto es así que el país, cuando produce un ciclo de desarrollo sostenido, termina al cabo de cuatro o cinco años generando un proceso de endeudamiento interno y externo que obliga a actuar radicalmente sobre las disponibilidades de divisas, contrayendo el desarrollo e interrumpiendo el ciclo de crecimiento.

El país ha tratado de compensar esta insuficiencia de divisas, que es el motivo por el cual se produce este tipo de estrangulamiento o cuello de botella en el desarrollo económico, con inversiones de capital directas e indirectas. Las inversiones indirectas se han ido tornando escasas en el mundo. Los grandes mecanismos financieros internacionales, que serían los que tendrían que apoyar este tipo de proyectos con inversiones de fomento para que los países en desarrollo pudieran resolver sus problemas de coyuntura, van siendo cada vez de eficacia más relativa, y los recursos se van dando, cuando se dan, en condiciones que en ciertos casos se tornan verdaderamente inconvenientes.

Los países, entonces, han optado por otro recurso, que es la inversión directa, para lo cual han legislado con el fin de crear seguridades al capital externo que presuntamente se va a radicar en distintas áreas del país.

Sin embargo, hay que destacar que el capital financiero internacional, tanto en lo que se refiere a inversiones directas como indirectas, está sometido, para decidir este tipo de inversiones, a una cantidad de subjetividades que de ninguna manera están contempladas totalmente en las leyes que pueden dictarse, aun cuando estas leyes puedan acercarse a la perfección, porque las inversiones que se deciden, más que observar las condiciones objetivas de las zonas donde van a radicarse, están influidas por consideraciones subjetivas. Es decir que un mercado determinado puede crear condiciones legales óptimas, pueden existir en él condiciones de mercado también óptimas, puede haber una oferta importante de recursos técnicos, humanos y naturales, puede haber un mercado ávido por la existencia de una gran demanda, pero si no están dadas las condiciones subjetivas, por más que estas otras de carácter objetivo existan, difícilmente pueda establecerse la corriente de capital con un volumen importante y trascendente para el desarrollo del país.

Por eso, el proyecto de ley que estamos tratando forma parte de este conjunto de decisiones objetivas que el país adopta para crear una corriente inversora en determinadas áreas de la

economía. Es decir que se tiene conciencia de la necesidad de promover este tipo de corriente inversora porque, indudablemente, la tasa de ahorro nacional no alcanza a proveer los recursos necesarios para que el proceso de desarrollo tenga características de permanencia y se desenvuelva en el tiempo sin estos ciclos de interrupción o de estrangulamiento, que terminan deformando la armonía interna imprescindible para que tal proceso se articule como un conjunto que tienda a satisfacer las necesidades del país.

Esta toma de conciencia acerca de la conveniencia de que exista a este respecto una ley para crear una corriente de capitales está expresamente determinada, como ya expusimos en el debate anterior, por decisiones adoptadas en la mayoría de los programas políticos partidarios que se discutieron y expusieron al pueblo en oportunidad de la campaña electoral con motivo de las elecciones del 11 de marzo.

La Alianza Popular Revolucionaria también contempla y establece taxativamente, en el capítulo XV, de las inversiones extranjeras, que los objetivos en esta área apuntan a: recuperar la autonomía de decisión frente a grupos u organismos internacionales; determinar la participación extranjera con iguales garantías que el capital nacional; promover la capitalización del país a partir de un plan de ahorro, si fuere necesario forzoso, y de inversiones; replantear los acuerdos de financiamiento externo que limiten la independencia de decisión nacional; recuperar el control de las empresas desnacionalizadas en los últimos años, ejerciéndose una vigilancia estricta sobre la transferencia del capital de las empresas al exterior; la fijación de áreas para las inversiones extranjeras, condiciones de explotación y uso del crédito interno, obligación de incorporar equipos técnicos y tecnología moderna, y formas de remisión de ganancias al exterior.

La mayor parte de estos puntos expuestos, contemplados en la plataforma política de la Alianza Popular Revolucionaria, figuran en el proyecto de ley en consideración. No obstante, con respecto al tema específico del proyecto tenemos que señalar que, desde nuestro punto de vista, funciona dentro de ciertas coordenadas que están dadas por la reiteración de facultades que se delegan al Poder Ejecutivo y la serie de excepciones que, en particular, se prevén en los artículos. Todo esto hace que este proyecto, en vez de tener una rigidez conceptual establecida por el Parlamento, transfiera la mayor cantidad de decisiones posibles al Poder Ejecutivo.

Este proyecto se convierte así en una ley enunciativa, con una plasticidad en la concepción de la ejecución que coloca en manos de los funcionarios que la van a aplicar una cantidad de facultades que quizá no estén implícitamente determinadas en las decisiones de los legisladores. De ahí que el éxito o el fracaso

de esta ley dependerá de la forma en que ella se aplique o ejecute.

Además, queremos hacer específicamente algunas observaciones. La primera se refiere al inciso h) del artículo 59, que requiere que las inversiones no signifiquen el desplazamiento actual o futuro del mercado de empresas de capital nacional. Esto se vincula con la posibilidad de que por esta vía se produzca un efecto que ha tenido claras manifestaciones en administraciones económicas inmediatamente anteriores a este gobierno, y que ha producido en grandes sectores de la industria del país un acentuado y acelerado proceso de desnacionalización.

No participamos del criterio de que las inversiones extranjeras puedan radicarse en áreas industriales que ya están cubiertas por el capital nacional. Preferimos que la autoridad económica que aplique esta ley impulse a las empresas nacionales que se desenvuelvan en esa área, dotándolas de las mejores condiciones posibles para que puedan absorber la tecnología más eficiente y para que su desarrollo las coloque al nivel de la competencia internacional.

Otro aspecto sobre el cual la Alianza Popular Revolucionaria quiere dejar expresado su pensamiento se refiere a la prohibición de autorizar nuevas radicaciones destinadas a actividades agrícola-ganaderas y forestales, salvo las que incorporen tecnología nueva de especial interés para la economía nacional, a juicio de la autoridad de aplicación, prohibición contenida en el apartado 7, del inciso c) del artículo 69.

La expresión «a juicio de la autoridad de aplicación» se repite con bastante frecuencia en el texto del proyecto, y por eso expresábamos hace un momento que en la práctica esta ley generará una gran cantidad de posibilidades que quedarán en manos de los funcionarios que la vayan a aplicar, convirtiéndose así en una ley meramente enunciativa. Pienso que habría que volver al pensamiento del proyecto originario y dejar establecido taxativamente que quedan prohibidas las inversiones extranjeras en el área agrícola-ganadera.

Tenemos una vieja prevención sobre esta cuestión, que hemos tratado de denunciar para que la opinión pública tome conciencia de este grave problema. La política ganadera anunciada por el actual gobierno está dada por la política de precios, por la ley de colonización agraria, por la ley que crea el impuesto a la renta potencial de la tierra y por la ley que determina la existencia de las tierras aptas para la producción.

Este conjunto de disposiciones nos lleva al convencimiento de que actúa con una agresividad hacia el sector cuyas consecuencias directas resulta difícil de prever, aunque ya pueden advertirse algunos síntomas. Creemos que, mediante los impuestos que se creen, la política de precios máximos y la inseguridad que implica el artículo 10 de la ley sobre las tierras aptas, se instauran

condiciones que actúan muy duramente sobre el sector y que, en definitiva, producirán una caída vertical de su renta y, por lo tanto, una caída en el precio de la tierra, lo cual va a traer aparejado —o ya lo ha traído, en alguna medida— un aumento en la oferta de tierras disponibles.

De mantenerse el conjunto de disposiciones a que me refiero, el valor de la tierra en la pampa húmeda oscilará, como promedio, entre 200 y 300 mil pesos moneda nacional la hectárea. Es decir que con 200 o 300 dólares se podrá comprar en la pampa húmeda una hectárea de las mejores tierras del mundo, ubicadas en la zona templada, con una aptitud para producir granos y carnes como no la tiene ninguna otra tierra en el mundo, y que además, a muy corto plazo, se convertirá en un recurso estratégico, porque la multiplicación malthusiana de la población elevará el número de habitantes, dentro de 20 años, de los 3.500 millones que existen actualmente a unos 7.000 millones, con lo cual los alimentos se convertirán —e inclusive ya se han convertido— en uno de los recursos más escasos. Esto originará en los países que no tienen la posibilidad de revertir el ciclo que trajo apareado el comercio internacional un desnivel en los precios, creando a favor de los productos industriales, en la medida en que decae el precio de los productos básicos, un desajuste que dificulta el proceso de desarrollo de los países productores de materias primas.

Este conjunto de hechos ya se ha producido en algunos países, como en Australia, y está teniendo lugar también en países de Latinoamérica en los que existen grandes inversiones en tierras. A muy corto plazo puede producirse la enajenación o la desnacionalización de este sector, completando un hecho que ya se ha producido en el área industrial en las administraciones económicas que precedieron a este gobierno.

Si previéramos una inversión de 2.000 millones de dólares, cifra relativamente importante dadas las disponibilidades de esta divisa que existen en algunos mercados del mundo, y si damos como válida la caída del precio de la tierra, que puede llevar a una hectárea en la pampa húmeda a un valor promedio que oscile entre 200 y 300 mil pesos viejos, tendríamos que reparar que con 2.000 millones de dólares podrían adquirirse unos diez millones de hectáreas en la pampa húmeda, es decir, absorberse una octava parte de esta maravillosa zona de la tierra cuyas posibilidades de incrementar la producción de alimentos son enormes y, además, se permite hacerlo con una escasa o muy baja inversión de capital.

De allí que yo desee, señor presidente, que este punto 7 del inciso c) del artículo 69 no se convierta en la puerta abierta para que la Argentina pueda ser penetrada. Téngase en cuenta que este recurso coloca al país en una situación clave y trascendente desde el punto de vista.

económico, porque podrá actuar —como decíamos en el debate anterior— en condiciones monopólicas u oligopólicas con relación a algunos productos de exportación indispensables en el mercado internacional. Dicho recurso es sumamente estratégico, y lo va a ser mucho más a corto plazo. Por eso no queremos que sea enajenado en esta etapa de penetración imperialista que opera en función de métodos que se aplican a una nueva realidad.

Deseo hacer otra observación al punto 8 del inciso c) de este mismo artículo 6º, que establece la imposibilidad de invertir en el sector de pesca, pero que también crea una facultad delegada en el organismo de aplicación. Dice este punto: «Pesca, excepto cuando posibilite el ingreso de la producción a mercados internacionales cerrados».

Si la situación mundial denota una política de demanda de alimentos y si para el año 2000 la población del mundo será de 7.000 millones de habitantes, la curva de crecimiento de la demanda de alimentos tenderá a acentuarse. Se acentuará entonces para toda la gama de alimentos, tanto para los alimentos caros, ricos en proteínas, como para los baratos, los hidratos de carbono. Si esto es así no hay razón para que en la ley contemplemos una excepción para que se pueda invertir capitales en el sector de pesca, mediante convenios que tengan por destinatarios aquellos países que han cerrado la importación de pescado. Nos parece que ésta es una vía o una forma de crear excepciones de aplicación peligrosa.

Con estas breves palabras dejo expresado sobre el particular el pensamiento de la Alianza Popular Revolucionaria. (*Aplausos.*)

**Sr. Presidente** (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Merchensky.

**Sr. Merchensky.** — Señor presidente: los diputados del Movimiento de Integración y Desarrollo, que formamos parte del Frente Justicialista de Liberación, no pensábamos intervenir en este debate, puesto que con la exposición de carácter general, brillante y clara, del señor diputado Ferreyra entendíamos que quedaba cumplida nuestra participación en la consideración general de este conjunto de leyes que ha enviado el Poder Ejecutivo.

A partir de ese momento —no ha habido cambio en ello— nosotros votamos solidariamente todas las medidas incluidas en los despachos de la mayoría, con alguna que otra consideración de carácter incidental.

Hemos trabajado en las comisiones, participando inclusive en los aspectos técnicos y políticos de la confección y perfeccionamiento de estas leyes. De tal manera y con los alcances que precisaremos, nos sentimos cabalmente interpretados por las palabras de nuestros compañeros de bancada, dentro del movimiento revolucionario que integramos. Sin embargo, circunstancias especiales nos obligan a perfilar

nuestra opinión y volver a explicar por qué, sin reserva alguna de carácter político, vamos a votar solidariamente esta ley.

Lo hacemos, porque formamos parte de un movimiento revolucionario. Nuestras discrepancias no son únicas, por cierto, dentro del movimiento nacional. Como muy bien lo dijo el general Perón, este movimiento se caracteriza por su diversidad en los aspectos ideológicos e inclusive instrumentales. El Movimiento de Integración y Desarrollo y el movimiento nacional saben que el propio proceso revolucionario va perfeccionando y cambiando las herramientas cuando las circunstancias lo requieren.

Como somos optimistas, confiamos en que este proceso de carácter revolucionario encontrará las herramientas adecuadas para alcanzar sus objetivos; si las que estamos dando al Poder Ejecutivo no llegaran a mostrar tal carácter, aun contra nuestra opinión teórica, y lo que hemos recogido de la experiencia histórica, seremos los primeros en reconocerlo.

Entramos en este debate por tres razones fundamentales: la primera es el escándalo de la declaración Krebs, aunque no creemos que nuestros aliados y nuestros partidarios malentiendan nuestra decisión; ellos saben que votamos afirmativamente la ley por una decisión anterior, claramente tomada y no bajo la presión de este acontecimiento, en el que el país y la Cámara se han unificado como lo hacen siempre los pueblos dignos frente al enemigo que pretende allanar su soberanía. Ayer hemos dado un claro ejemplo de solidaridad con las brillantes palabras de los diputados Pedrini y Busacca, que resumieron la posición del país frente a la agresión.

La segunda razón se refiere a palabras que se han pronunciado en este recinto, dentro de la cordialidad que campea en el debate, pero que nos obligan a definir la posición del Movimiento de Integración y Desarrollo frente al candente problema de la función del capital nacional y extranjero en el desarrollo.

Finalmente, lo hacemos porque aunque no planteamos una cuestión de privilegio —no vamos a incursionar en el campo autobiográfico como suele hacerlo el señor diputado Falabella—, señalamos que hemos sido agraviados en el día de ayer, y nuevamente hoy, por un diario, el de menor circulación entre los que aparecen en Buenos Aires, que pretende reflejar opiniones, según su nombre, que hasta el día 11 de marzo fue un diario al servicio incondicional de la dictadura y que ahora se ha puesto al servicio incondicional de un sector del gobierno, no del gobierno ni del movimiento nacional, sino específicamente de un sector y contra otros sectores, algunos ubicados circunstancialmente en el más alto punto de la conducción política y gubernamental.

Hubiéramos deseado que el Parlamento, en lugar de discutir este proyecto, estuviera votando

la ley 14.222, en virtud de la cual el general Perón propuso en 1953, por primera vez, incorporar al país capital extranjero en forma orgánica, para servir a la obra del desarrollo.

No voy a entrar en el análisis de esa ley, simplemente destacaré dos características fundamentales que la diferencian del proyecto que tratamos.

La ley 14.222 consideraba que el capital extranjero que venía a radicarse en el país podía llegar inclusive a recibir los beneficios que surgían de considerar dicha radicación como de interés nacional, cuando se ubicara en aquellos puntos estratégicos que permitiesen el desarrollo acelerado de nuestra economía. Ello era así porque se basaba en el principio de que, como recientemente ha señalado un periodista peronista de extracción nacionalista, en un periódico económico, sigue siendo mejor para la defensa nacional que hagamos el acero en el país, con capital nacional o extranjero, a que estemos condenados a comprar las armas, para la defensa de nuestra soberanía y de nuestro territorio, a las potencias que puedan tener la decisión de vendérsenoslas o no.

El otro punto fundamental de diferencia radica en que la ley peronista número 14.222, de 1953, se preocupaba para que el capital extranjero se nacionalizara; pero al hacerlo, no proponía planes de alejamiento, sino planes de radicación definitiva. Por esas razones prohibía el retorno de esos capitales a su país de origen antes de un prolongado número de años, para darle así amplia oportunidad de afirmarse y nacionalizarse.

Nosotros creemos que los capitales sirven a los intereses nacionales cuando concurren a mover las palancas del desarrollo, cuando nos ayudan a ser una Nación integrada, cuando desenvuelven los recursos infinitos de este país, de esta Argentina potencia que nosotros queremos.

Seguimos sosteniendo que es mejor producir el acero, ya, en nuestro país, así como el arrabio —primera etapa del desenvolvimiento siderúrgico—, que estar condenados a importarlos. En cambio, creemos que el capital, proceda de donde proceda, es esclavista y nos somete cuando aprieta las coyundas de la estructura agroimportadora y nos condena a no crecer y a ser dependientes del exterior.

Ayer, en una declaración —que cuenta con la solidaridad de toda nuestra bancada—, nuestro compañero y presidente del bloque, señor diputado Pedrini, denunció cómo las voces se callan, en uno y otro sector cuando se trata por ejemplo, de Bunge y Born, monopolio supuestamente argentino que tiene la responsabilidad, no subjetiva sino objetiva, del sometimiento del país al factor externo y que determina que perdamos millones y millones de dólares cada año, a lo largo de mucho más de medio siglo.

Nadie le dice al país que por el manejo —en las metrópolis del capital, en los puntos de con-

sumo— de la enorme masa de materias primas y alimentos que exportamos todos los años, se facturan cuantiosas comisiones que los monopolios de la importación ganan para sí y que utilizan en parte para desenvolver determinados campos de la empresa, en un proceso de concentración donde se utilizan medios para masacrar a la pequeña y mediana industria que ya no se aplican en ninguna otra parte del mundo.

Alguna vez tendremos que analizar la historia de los últimos años, en que se produjo la concentración de la industria acenera, de la industria hojalatera y de la industria de las conservas, que se ha hecho sobre la sangre de los empresarios argentinos, utilizando métodos que parecían desaparecidos inclusive del mundo capitalista y de sus colonias. Ese es el capital que nos somete, sea cual fuere su origen.

Es por ello que nosotros, en forma permanente y muchas veces como una voz aislada en el desierto, hemos repetido a lo largo de estos siete años, lapso durante el cual el capital extranjero tuvo las puertas abiertas para intervenir en el proceso económico argentino, que ese capital que ingresaba, no por su condición de extranjero sino por la función que cumplía, era un capital esclavista. Se produjo así el extraño fenómeno de que en esos siete años el país fue sometido a un proceso de desinversión y simultáneamente a un proceso de desnacionalización. Contra todo esto debemos gobernar para evitar que vuelva a repetirse esa situación.

Es por ello que saludamos como propicio, más allá de las disidencias que pudiéramos tener sobre el método que se aplique, el principio de la nacionalización de los depósitos bancarios, que es un instrumento efectivo para manejar el crédito a condición de que sea respaldado por una política efectivamente nacionalista.

También respaldamos la renacionalización de la banca, no por la importancia cuantitativa que tenga en el proceso, sino porque es indicativa de la voluntad de hacer retornar al país los instrumentos del manejo del crédito que sirven para la orientación del crecimiento.

Estos son nuestros fundamentos, pero queremos que quede en claro que somos los primeros, y lo hemos sido siempre, en denunciar la acción perturbadora de las embajadas extranjeras. En la propia historia de nuestro movimiento encontramos la experiencia vívida de lo funesta que resulta esta intervención.

En el año 1961, poco antes de su caída, el presidente Frondizi tuvo que reclamar ante el presidente Kennedy el alejamiento de un embajador que, junto con sectores de la oposición, conspiraba para derrocarlo. El doctor Frondizi logró que ese embajador fuera alejado del país, pero el presidente Kennedy, que estaba jugado en el interés y en la defensa de los pueblos, al enviar un embajador que permitiera lograr una comunicación entre los presidentes y los pue-



blos, advirtió al presidente argentino que él mismo debía reunirse en secreto cuando tuviera que tomar cierto tipo de decisiones, porque el aparato que lo rodeaba, no solamente lo espiaba sino que inclusive tergiversaba sus decisiones.

Así fue que en vísperas de la caída del gobierno del doctor Frondizi, a espaldas del embajador, sus auxiliares inmediatos estaban constantemente en la conspiración que finalmente derrocó al doctor Frondizi.

En la misma línea hemos visto actuar a organismos de los Estados Unidos de América, junto a sus cómplices argentinos, en la falsificación de los llamados «documentos cubanos» para crear una crisis que solamente la entereza moral de un presidente como el doctor Frondizi pudo evitar en aquel momento.

Y finalmente, para terminar, destaco ante la Cámara el hecho que nos agravia. Se trata de expresiones de un diario que no quiero nombrar, cuyo director propietario emigró en su oportunidad para radicarse definitivamente en Israel, porque la Argentina no le brindaba el aire que él necesitaba. Como director de ese diario trabajó con denuedo al servicio del gobierno de la dictadura, recibió por torrentes la publicidad oficial en una proporción no registrada por ningún otro órgano de prensa, con relación a su corta tirada. Sin embargo, hoy tiene el desenfado de aparecer defendiendo al gobierno de la revolución nacional; pero no defiende a este gobierno, sino que, por el contrario, intriga en contra de él.

Ayer mismo, al hacer el relato de este doloroso y vergonzante episodio de los memorandos del señor Krebs, hace un relato propio, íntimo; un relato de quien pretende conocer por mano derecha, por la confidencia directa, lo que ocurrió. Este señor, en estas condiciones que señalo, le dice al pueblo argentino que el actual presidente provisional de la República escuchó las insolencias de Krebs y recibió sus memorandos hace un mes y medio y no reaccionó dignamente, y que hizo falta que el ministro amigo del director del diario viera los documentos para que el sentimiento argentino fuese reivindicado. Yo, sin conocer la intimidad del episodio, digo que no hay en las filas del movimiento nacional ni un solo hombre, sea cual fuere su rango o la opinión que nos merezca en su actividad política concreta, que guarde silencio frente a la infamia. La infamia consiste en que, día a día, desde ese diario infiltrado en las filas del movimiento nacional y desenmascarado por todos nosotros, se está intentando una tarea imposible: la de dividir. Pero no lo logrará.

Con lo manifestado al comenzar mi exposición dejo fundamentado el voto favorable a ésta y a todas las leyes del conjunto que nos ha enviado el Poder Ejecutivo, por la solidaridad revolucionaria que anima al Movimiento de Integración y Desarrollo. (Aplausos.)

**Sr. Presidente** (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Toller.

**Sr. Toller.** — Señor presidente, señores legisladores: a poco que analizamos lo ocurrido en los últimos años, vemos con profunda desazón la exactitud de los fundamentos sostenidos en el plenario de las organizaciones sociales y partidos políticos, con respecto a que una gran proporción del flujo de tecnología e inversiones extranjeras no fueron canalizadas hacia objetivos compatibles con un desarrollo nacional autónomo.

Esta innegable realidad hacía imperiosa la necesidad de proyectar una ley que fijara un régimen ágil y a la vez determinante de las condiciones específicas de la radicación y que estableciera las características y requisitos intrínsecos del organismo legal representante de dicha inversión en la República Argentina.

Nuestro país fue uno de los primeros en legislar en este aspecto. Recordemos el decreto 3.347/48 y especialmente la ley 14.222 que trataba sobre el régimen para las radicaciones de capital extranjero. Hasta la fecha, la consideración de todas las inversiones fue resorte exclusivo del Banco Central de la República Argentina, siendo reguladas por sus disposiciones expresas. Esta nueva ley no es, pues, una novedad.

Un somero análisis del articulado del proyecto de ley que estamos tratando, en especial de su artículo 59, permite extraer la adecuada orientación del Poder Ejecutivo nacional en su inquietud permanente por dotar a su política económica de la claridad necesaria para no dudar del despegue argentino hacia la meta promisoría en la que todos estamos empeñados.

Las radicaciones autorizadas traerán apareadas la plena ocupación de los recursos productivos, la formación de una tecnología nacional y la elevación social de la mano de obra, promoviendo sustancialmente el índice de nuestras exportaciones y revertiendo en divisas el saldo favorable de ellas.

Por tales conceptos, el Partido Orientación Legalista, de Santa Fe, que represento, no quiso dejar pasar la oportunidad de dar su opinión al respecto. Entendemos que este proyecto de ley facilitará la radicación de capitales extranjeros, pero dichos capitales deberán cumplir con la verdadera función que pretendemos, integrándose al proceso revitalizador que se genere. Esos inversionistas foráneos deben comprender que la Argentina no es más colonia ni dependencia de ningún país. No recibiremos órdenes de ningún gobierno, y si los requisitos que les imponemos están en contra de sus intenciones ocultas, es preferible que se queden en su lugar de origen, plenamente convencidos de que solo tendrán cabida en la República quienes deseen contribuir a la formación de la Argentina potencia. Las ataduras económicas han quedado borradas definitivamente del escenario argen-

tino en su nueva conformación jurídica, política y social.

En consecuencia, votaremos favorablemente este proyecto de ley y solicitamos su aprobación en general. (*Aplausos prolongados.*)

**Sr. Presidente** (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Insúa.

**Sr. Insúa.** — El proyecto de ley sobre radicación de capitales extranjeros constituye, sin lugar a dudas, uno de los más trascendentes del conjunto de leyes económicas en tratamiento por este Congreso, ya que con otras instrumentaciones legales que puedan completarlo será la herramienta indispensable y necesaria que permitirá al Estado tomar el rumbo definitivo e impostergable, basado en los principios fundamentales de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, que proclaman y reclaman las grandes mayorías populares argentinas, entre las que se enrola nuestro partido, la Unión Popular. Todas ellas, en coincidencia programática, se han comprometido solemnemente en el proceso de liberación de la dependencia externa.

Para el logro de tales objetivos, la Unión Popular anuncia, desde ya, su voto favorable en general a la iniciativa, sin perjuicio de exponer breves y sucintas reflexiones y advertencias e inclusive proponer, concretamente, la reforma del artículo 6º del proyecto.

De la exégesis del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo resulta que esta iniciativa debe ser analizada a la luz de los resultados que ofrecen hoy los hechos que en esa materia se produjeron en el país, no sólo en lo referido a su aspecto reglamentarista con respecto a áreas, reintegros y remesas al exterior, sino prioritariamente para establecer un sistema que permita al Estado controlar el proceso de inversión programado, a fin de que se ajuste al convenio correspondiente y no se convierta en ilusorio objetivo el ingreso de los recursos previstos.

Muchos de los grupos extranjeros actuantes hoy en el país deben buena parte del desarrollo de sus áreas productivas a aportes nacionales que son el resultado del esfuerzo del trabajo y del ahorro del pueblo, entendiendo por tales un cúmulo de medidas de excepción que siempre rodearon a las pertinentes reglamentaciones, reportando beneficios que permitieron soslayar las exigencias fiscales para la determinación de las utilidades correspondientes, cuando no representaron los únicos y positivos márgenes de utilidades producidos por aparentes inversiones foráneas.

Es así como muchas veces vimos a empresas extranjeras actuando como agentes de retención y lucrando con la reinversión de cuantiosos fondos derivados de las concesiones graciosas que posibilitaron tales circunstancias, como también fuimos testigos de la creación de condiciones promocionales inspiradas por los mismos grupos inversores tendientes a su presentación como in-

centivos de inversión por parte del Estado argentino.

No podemos olvidar, señor presidente, que algunas veces fuimos «beneficiados» con aportes de tecnología y matricería que llegaron a nuestro país para dar solución a supuestos y ambiciosos planes de desarrollo industrial, y que en su traducción para la empresa inversora representaron un trasplante de medios totalmente amortizados y de producción superada en sus respectivos ámbitos nacionales.

Creemos importante contar con inversiones extranjeras para acelerar nuestro desarrollo, pero también debemos aguzar nuestro ingenio para practicar un criterio selectivo de las áreas importantes, aunque ello implique un mayor trabajo por parte de nuestros organismos de apoyo a nivel oficial.

Nos sabemos poseedores de una base tecnológica referida a recursos humanos capaz de asimilar rápidamente las enseñanzas exigidas por las más modernas concepciones en esta materia, razón ésta que nos puede llevar a crear condiciones para que la inversión extranjera tienda a ser financieramente pura; o sea que se oriente hacia donde nosotros queremos orientarla con relación a los planes nacionales correspondientes, que son los que deben expresar nuestras necesidades, y no esperar a que alguien de afuera nos sugiera apoyarnos con planes sobre actividades que, si bien pueden ser útiles, no guardan la relación correspondiente en tiempo y proceso con el resto del esfuerzo argentino en la materia.

La legislación propuesta instrumenta un articulado que grita la defensa de lo nacional. Pero también en ese excesivo celo puesto en evidencia para demostrar esa orientación puede encontrarse la razón de convertir este proyecto de ley en un extenso código de imposibilidades. Por ello, el éxito de esta ley o de cualquier otro elemento de legislación que la complementa o la reemplaza debe estar referido al deseo concreto de su aplicabilidad a los hechos materializados, no quedando la legislación limitada a integrar un código condicionador de intenciones y buenas ideas.

Estimamos como muy importante dar las condiciones para que el capital extranjero se establezca en nuestro país, para lo cual el Estado debe someter a su consideración en el mercado internacional el cúmulo de proyectos cuya materialización hará a la responsabilidad del Estado, y en los cuales los sectores inversionistas podrán efectivizar aportes con una sistematización que puede estar representada por el articulado de este proyecto. Pero entendámonos, señores diputados: si no hay proyectos, no hay inversión; si no hay planes, no hay proyectos, y si no hay un análisis exhaustivo de las exigencias nacionales, no hay planes.

Consideramos necesario fijar para las inversiones extranjeras dos tipos de niveles de valoración, dados ellos por su calificación en in-



versiones que tienden a evitar egresos de divisas e inversiones que tienden a producir ingresos de divisas. En el primer caso, paralelo al permiso de radicación, se produce una automática cesión sobre un determinado sector del mercado interno consumidor de la elaboración, la que puede revestir el carácter de producto terminado en sí mismo o de elemento intermedio para ser usado por otros procesos manufactureros. Lógicamente, debe tener preeminencia el segundo, por cuanto será fuente de otros procesos posteriores que ya pueden caer dentro de las posibilidades del capital nacional. Cuando la radicación se refiera al segundo grupo, o sea al constituido por las inversiones productoras de divisas, la ley correspondiente debe establecer la capacidad del Estado de regular el precio final del producto, dado que mediante bajas facturaciones pueden concretarse significativas evasiones en perjuicio del fisco y de la Nación Argentina.

Por todas las consideraciones vertidas, estimamos que el artículo 6º, en el cual se establecen las prohibiciones para nuevas radicaciones, podría reemplazarse en su totalidad, en función de la decisión de poner en práctica el sistema que signifique la formulación por parte del Estado de los planes y proyectos en los cuales él mismo cree conveniente y necesaria la participación del capital extranjero, realizado todo ello mediante la utilización a pleno de todos los medios de difusión del país o del extranjero, con relación a una eficiente labor promocional de nuestro personal del servicio exterior, con incidencia en las áreas comerciales e industriales, lo que permitiría explicitar con claridad los derechos y obligaciones del inversor, las garantías del Estado y la modalidad de remesas y reintegros en porcentajes y en tiempo. Vale decir que se trataría de formular el plan nacional de desarrollo, determinar nuestras falencias y necesidades, concretar sistemas y procesos, y posteriormente llamar e invitar a la participación en ellos a sectores del exterior interesados. Esta forma de presentación de los proyectos del país a la consideración del sector externo puede ser mucho más simple que el procedimiento de dejar librada a cualquier tipo de propuestas la atención de los requerimientos nacionales.

Estimamos que la ley debe dejar perfectamente aclarado que las radicaciones que respondan a procesos integrales estarán totalmente subordinadas al esquema tributario y de obligaciones sociales vigente para todo el país, o sea que no se establecerán condiciones que impliquen verdaderamente desvestir a un santo para vestir a otro.

Sintetizando la posición referida al proyecto de ley en tratamiento, declaramos que lo consideramos demasiado enumerativo en las condiciones para el inversor, lo que de por sí se convierte en un elemento limitativo de la materialización de algún tipo de proyectos dentro

de su ordenamiento. Dado que en este caso no se da el principio jurídico de que puede hacerse todo aquello que la ley no prohíbe, entendemos que es muy importante ir canalizando claramente nuestras necesidades, a las cuales atañe significativamente el apoyo externo, en forma concreta, con definiciones técnicas terminantes, en ubicaciones predeterminadas y con un régimen funcional ajustado a las particularidades que cada proceso exige.

Conforme con lo que expresara al inicio, apoyamos la aprobación de este proyecto y sugerimos la modificación del artículo 6º a los fines de su adecuación con nuestras formulaciones precedentes. Esperamos también que de insistir la mayoría de la comisión en la sanción del despacho tal cual viene redactado, los argumentos vertidos sean analizados por el Poder Ejecutivo para tenerlos presentes ante las eventualidades que en esta materia puedan producirse.

Con la presentación de la reforma propuesta para el artículo 6º ante la Secretaría de la Cámara, con copia dirigida al señor miembro informante de la comisión que produjo el despacho de la mayoría, deja así el bloque de la Unión Popular expuesta su opinión, por mi intermedio, en lo que concierne a la consideración del proyecto cuyo tratamiento abordamos.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Tiene la palabra el señor diputado Rafael.

**Sr. Rafael.** — Señor presidente: consecuente con lo que ya expuse en oportunidad del tratamiento en general del conjunto de leyes económicas, quiero simplemente agregar que este capítulo de las inversiones extranjeras tiene suma importancia porque está íntimamente vinculado con la soberanía política y la independencia económica del país.

Las inversiones extranjeras pueden canalizarse por dos vías: primero, mediante la inversión directa en la adquisición de bienes físicos; segundo, por medio de la transferencia de recursos financieros, lo cual se hace generalmente para América latina por intermedio del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo, cuyos créditos están sujetos a ciertas normas de conducta económica que ellos imponen.

Además, podemos señalar en esta materia de radicaciones extranjeras la presencia de lo que se llama el «crédito relacionado», que implica la obligación de invertir parte de los fondos en la adquisición de bienes al país otorgante del crédito. Ocurre también que los países inversores suelen vendernos remedios para nuestros males, lo cual generalmente es previo al diagnóstico que ellos mismos hacen de nuestra situación económica. Y ocurre también que cuando nos entregan la receta para nuestros males nos ofrecen remedios que no aplicaron ellos cuando intentaron desarrollarse, o bien, nos quieren enseñar principios de liberalismo económico para

nuestros países, mientras ellos aplican a muerte el dirigismo económico dentro de su propio país. Además, se les ofrece exenciones de impuestos y tasas especiales de cambio, amén de otros estímulos y franquicias.

Entre 1966 y 1968 fueron desnacionalizadas 54 empresas argentinas, 29 de las cuales pertenecen a sectores tan diversos como la fundición de acero, la fabricación de automóviles y repuestos, la petroquímica, la química, las industrias eléctricas, el papel y los cigarrillos. De las más poderosas empresas del país, que facturan ventas por más de siete mil millones de pesos anuales cada una, la mitad del valor total de las ventas pertenece a firmas extranjeras, un tercio a organismos del Estado y apenas un sexto a sociedades privadas de capital nacional.

La puesta en práctica de las recetas del Fondo Monetario Internacional muchas veces ha contribuido a voltear la industria nacional, a ponerla a los pies de corporaciones internacionales. So pretexto de estabilidad monetaria, el Fondo Monetario Internacional confunde la fiebre con la enfermedad y la inflación con la crisis de la estructura en vigencia. Nos quiere enseñar el librecomercio en el comercio, muchas veces prohíbe los cambios múltiples y los convenios de trueque, obliga a contraer hasta la asfixia los créditos internos, congela los salarios y desalienta la actividad estatal. A ello se suman las devaluaciones monetarias que sólo estimulan la concentración de capitales en beneficio de las clases dominantes y propician la absorción de las empresas nacionales por parte de los que llegan desde afuera con un puñado de dólares en la mano.

Se pueden señalar al respecto muchos casos en la historia de la captación de fábricas nacionales por estas empresas multinacionales. Además, como el vértigo del proceso tecnológico abrevia cada vez más los plazos de renovación del capital fijo en las economías avanzadas, la gran mayoría de las instalaciones y equipos fabriles exportados a los países de América latina han cumplido ya anteriormente su ciclo de vida y su amortización ya ha sido hecha en forma parcial o total.

Por eso, señor presidente, sostengo que la caridad internacional no existe. Ella debe comenzar por casa, como hacen los propios Estados Unidos, para quien la inversión externa es una ayuda interna: la economía norteamericana se ayuda a sí misma. Así, el Departamento de Comercio celebraba que la Alianza para el Progreso significó asegurar trabajo y empleo de mano de obra para 44 empresas.

El altísimo costo de la dependencia tecnológica que paga América latina surge simplemente de la mención de lo que pagan por licencias industriales los concesionarios de Coca Cola, Pepsi-Cola o Crush —para citar un ejemplo— por una simple pasta que se disuelve en agua y se mezcla con azúcar y gas.

Mientras los pueblos se multiplican a ritmo de vértigo, en una región que ostenta el más alto crecimiento del planeta el desarrollo del capitalismo dependiente margina mucha más gente de la que pretende integrar. Dentro de cada país se reproduce el sistema internacional de dominio. La concentración de las industrias en determinadas zonas refleja la concentración previa de la demanda en los grandes puertos o zonas exportadoras. La radicación en Buenos Aires y Rosario de las dos terceras partes de la industria argentina y el estancamiento de las grandes áreas del interior es el resultado de ese colonialismo interno que he señalado reiteradamente y que ya no se puede disimular ni consentir. Por eso es de desear que esta ley sea una herramienta más para que se revierta este proceso de dependencia interna.

Finalmente, podemos señalar dos cuestiones más en esta materia. La primera, que es necesario que el Estado se reserve el poder de decisión para imponer las condiciones de la inversión, y la segunda, que el Estado debe estimular la inversión hacia sectores prioritarios de la economía nacional y hacia regiones necesitadas, consultando el interés de ellas.

Por estas razones, voy a votar afirmativamente el proyecto de ley que está en consideración. (Aplausos.)

**Sr. Presidente** (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Lima.

**Sr. Lima.** — Señor presidente: no voy a poner el gesto adusto ni el acento grave al tratar este proyecto de ley de radicación de inversiones extranjeras, ni tampoco me voy a alarmar por la pretendida injerencia del señor representante del gobierno estadounidense, pues no vamos a descubrir en 1973 los excesos y los abusos de las empresas extranjeras radicadas en la República y porque tampoco nos podemos asustar por la pretendida injerencia de un representante de ese gobierno, porque la nota periodística permanentemente nos da cuenta que interviene y jaquea al gobierno popular de Chile, al de Bolivia y al del Perú.

Los diputados conservadores populares que constituimos el subbloque del Frente Justicialista de Liberación Nacional y que ayer no tuvimos oportunidad de firmar la declaración producida por esta Cámara, hacemos presente nuestro apoyo incondicional a ella, no por los argumentos que expresó el señor diputado que la fundó, porque nos parece que se excedió del marco de la medida cuando hizo apreciaciones sobre las gestiones políticas y de gobierno de otra potencia. Si nosotros reclamamos la autonomía en nuestros asuntos internos, debemos ser prudentes para apreciar y calificar las manifestaciones de otro Estado, en lo que se refiere a su propia política internacional. Pero si manifestamos nuestro apoyo a esa declaración, por los términos mismos de ese documento.

Habiendo aclarado esto, deseo expresar que en realidad nuestra historia es una vieja y cla-

ra enseñanza con respecto a lo que ha sucedido en este país con las empresas o con los gobiernos extranjeros. Desde la reyecía española, la colonia argentina se vio expoliada en su economía; sus tributaciones eran remesadas a España. Inglaterra continuó con su política de explotación de nuestro país; con los ferrocarriles y con las carnes mantuvo permanentemente succionada nuestra economía. Y luego, Estados Unidos de América, con sus compañías multinacionales, siguió succionando la economía argentina, llevándola a un deterioro permanente.

De manera, señor presidente, que no podemos asustarnos en este momento. Los argentinos somos los verdaderos culpables de esta situación, puesto que hasta el día de hoy no se dictó la legislación reguladora de la intervención de estas compañías. Recién hoy nos encontramos abocados al tratamiento de una ley que debió haberse dictado hace cien años. Recién hoy nos damos cuenta de que es preciso nacionalizar nuestra economía.

Pero, en esto, ¿no somos responsables todos los dirigentes políticos y todos los partidos políticos que en alguna medida hemos sido gobierno en esta República? ¿Por qué no confesamos abierta y francamente que hemos estado demorados en sancionar esta ley de fondo? Hemos estado en mora con el interés de la República; pero de cualquier manera nunca es tarde para esta lucha. Por eso el proyecto que consideramos es un gran paso en la materia y, en forma amplísima, llena un vacío en la legislación positiva nacional. Representa un gran paso en la liberación del país, lucha en la que todos los sectores estamos empeñados y comprometidos, y que indudablemente solo podrá cumplir el objetivo que se ha impuesto si media el concurso de todos los argentinos.

No podíamos, señor presidente, dejar pasar este instante sin hacer escuchar el pensamiento de los conservadores populares. Pero entrando concretamente en detalle, considero que es imprescindible modificar el artículo 4º del proyecto de ley que consideramos, a fin de que las radicaciones—instrumentadas por medio de un contrato de radicación entre la autoridad de aplicación y los inversores extranjeros—deban ser sometidas en todos los casos a la aprobación del Honorable Congreso de la Nación. Considero fundamental dar atribución al Congreso para intervenir en cuanto convenio se haga con empresas extranjeras.

De esta manera, dejo fundada mi posición en este debate y la propuesta de rectificación de la parte pertinente del artículo 4º a que acabo de referirme.

**Sr. Presidente (Busacca).**— Tiene la palabra el señor diputado Rabanal.

**Sr. Rabanal.**— Señor presidente: entro en este debate —de por sí cargado con innúmeras connotaciones políticas— a fin de formular algunas observaciones, que en muchos casos son

reproducción de las formuladas en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y que a juicio de la bancada de la Unión Cívica Radical pueden incorporar elementos útiles para una mejor definición del proceso de la inversión extranjera.

Queremos señalar que admitimos el punto 5 del inciso a) del artículo 1º, pero exclusivamente en función de que la Comisión de Legislación Penal, de acuerdo con el compromiso asumido por sus integrantes —sé que están trabajando en ello—, proyecte los nuevos tipos penales que hagan referencia concreta a la inversión extranjera y que han sido suprimidos en este dictamen de comisión, puesto que se encontraban incluidos en el mensaje del Poder Ejecutivo. Mediante esas normas penales podríamos reprimir a quienes utilizan los títulos de la deuda externa nacional para poder encubrir una falsa inversión.

En cuanto al inciso e) del artículo 5º, que elabora —podríamos llamarla así— una balanza de pagos especial para cada una de las inversiones, queremos precisar que cuando habla de la posibilidad de una substitución de importaciones debe establecer que se trata de substituir importaciones necesarias antes de la radicación del capital extranjero; y que no sea para substituir importaciones cuya necesidad se haya creado con motivo de la llegada de ese capital extranjero.

Nos preocupa también, en el citado artículo 5º, la captación del ahorro interno que se realiza a través de la norma del inciso i), porque entendemos —como se ha dicho durante todo este debate— que la inversión externa viene a cumplir en el país un papel supletorio y, fundamentalmente, a reforzar las necesidades de capitales que tiene el país donde ella se radica.

Quiero señalar que en un artículo publicado por la «Revista de Comercio Exterior», del Banco Nacional de Comercio Exterior de México, perteneciente a Salgado y Peña Herrera, se analiza el Grupo Andino y la inversión extranjera, antecedente directo de acuerdo con el contenido del mensaje de este proyecto de ley que estamos considerando; y uno de los requisitos que se entiende debe ser indispensable en la reglamentación de la inversión foránea es el sistema de estímulo y protección razonable a la empresa nacional. Entre los medios de esa protección, habla de las medidas para evitar un uso excesivo de los recursos de financiamiento interno por parte de las empresas extranjeras. Más adelante, al referirme a otros artículos —concretamente al artículo 25 de este proyecto de ley—, he de ampliar las referencias con relación al ahorro interno.

El artículo 6º —tan meneado durante todo el debate— indica concretamente los sectores en los que no han de poder radicarse los capitales, que es uno de los elementos tomados en consideración en la insólita presentación efectuada

por el representante norteamericano. Queremos decir que en el punto 2 del inciso c) de ese artículo 6º, cuando habla de servicios públicos, se excluye uno que entendemos es indispensable que figure. Me refiero al gas.

Con respecto al punto 3, solicito que el señor diputado Díaz Ortiz analice con criterio amplio la posibilidad de establecer una modificación. Se ha agregado en la comisión, pese a nuestra oposición, en la última parte de este punto, que se refiere a seguros, banca y actividades financieras, un párrafo que dice: «No se considerarán nuevas radicaciones las incluidas en el inciso c) del artículo 2º». En ese inciso c) se define cuáles son las empresas de capital nacional. Vale decir que, mediante esas palabras, se permite que el capital extranjero venga a radicarse y a practicar en el país el negocio del seguro, de la banca y de las actividades financieras, que es precisamente el área donde tenemos en este momento los mayores conflictos, porque luego de esta ley la Honorable Cámara va a considerar el proyecto sobre renacionalización de empresas bancarias para resolver un problema que no solo hace a la economía del país, sino también a su moral, y que, por rara paradoja, también ha sido materia de preocupación de esta insólita nota del representante norteamericano.

**Sr. Díaz Ortiz.** — Me permite una interrupción, señor diputado.

**Sr. Rabanal.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Díaz Ortiz.** — Ese párrafo, señor diputado, se refiere a las empresas que la propia ley, en el inciso c) del artículo 2º, define como empresas de capital nacional y que no pueden tener más del 20 por ciento de capital extranjero.

**Sr. Rabanal.** — Interpreto que el señor diputado pretende señalar que esa participación del 20 por ciento es insignificante y que no permitirá el manejo de las empresas. No conozco realmente cuál es la idea de los grupos extranjeros. Pero tengo conocimiento de que en algunos bancos que se van a renacionalizar, y cuya licitación posterior prevé la ley, el capital extranjero se conformaría con poder ingresar en esas instituciones simplemente con el 20 por ciento.

Por otro lado, si lo que buscamos es tecnología, que es prácticamente a lo que apunta con mayor énfasis la ley, debemos tener en cuenta que en el área financiera no hay ninguna tecnología que importar. Además, y lo hemos dicho durante toda nuestra campaña electoral, una de las formas de desvirtuar la incidencia del proceso de nacionalización económica es por medio del dominio de los resortes financieros.

**Sr. Díaz Ortiz.** — Esa es una afirmación que corre por cuenta del señor diputado, porque en una empresa, de cualquier tipo que sea, el grupo que tenga solamente el 20 por ciento del capital encontrará dificultades para controlar las decisiones de la empresa.

**Sr. Rabanal.** — No pretendo comprometer al señor diputado en la opinión de que la participación del capital extranjero en la banca, aun en un 20 por ciento, es un factor distorsionante en un proceso financiero interno. Es una afirmación que corre por mi cuenta, pero quiero significar que no advierto la utilidad de admitir que la banca extranjera participe con un 20 por ciento en el proceso financiero. Es una observación que nosotros formulamos en este momento y que el sector de la mayoría podrá o no recoger. Simplemente dejamos a salvo la responsabilidad de la Unión Cívica Radical en este tema.

**Sr. Díaz Ortiz.** — De acuerdo, señor diputado.

**Sr. Rabanal.** — También participo de las atinadas observaciones del señor diputado Arana con relación al punto 7 de este mismo inciso c).

**Sr. Presidente (Busacca).** — La Presidencia ruega al señor diputado Rabanal que abrevie su exposición, pues el término de que disponía para hacer uso de la palabra ha vencido con exceso.

**Sr. Rabanal.** — Entiendo que llevo solamente dos minutos de exceso, señor presidente.

**Sr. Díaz Ortiz.** — Solicito, señor presidente, que se le descuente el tiempo de mi interrupción.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Muy bien, señor diputado.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Rabanal.

**Sr. Rabanal.** — Con breves palabras trataré, por lo menos, de dejar establecida la posición de la Unión Cívica Radical sobre este problema.

También nos preocupa el punto 8º, que se refiere a la pesca, si bien tenemos en cuenta las explicaciones que dio el secretario de Hacienda, ingeniero D'Adamo, en la comisión.

Estimamos que la posibilidad de repatriar un 20 por ciento que determina el inciso b) del artículo 12 es muy amplia. Consideramos que esta repatriación en cuotas anuales tendrá que ser de un monto menor, tomando en cuenta la balanza de pagos.

También estimamos que la tasa del 12,50 por ciento, en materia de transferencia de utilidades, o la que exceda en cuatro puntos el interés de los bancos de primera línea, no se justifica en cuanto a la dualidad. Creemos que podría establecerse una cifra menor, cosa que pusimos en conocimiento del ministro de Hacienda. No conocemos que, salvo en el Pacto Andino, donde se autoriza hasta el 14 por ciento, se autoricen cifras mayores, porque aun en el caso del Brasil, si bien no fija límites para las remesas, cuando durante tres años consecutivos ellas exceden el 12 por ciento se les aplica un impuesto del 60 por ciento sobre las utilidades remesadas.

Deseo señalar que la incorporación de la última parte del artículo 15, cuando señala que la inversión o reinversión como capital local de las utilidades que no hayan sido remesadas en tiem-

po, o que excedan de la autorización a remesar, se hará previa conformidad de la autoridad de aplicación, corresponde a una inquietud del radicalismo, porque nosotros presumíamos que por esta vía podría haberse provocado también una desnacionalización y que, al no haber limitación en las áreas donde se habrá de realizar esta reinversión, podría ocurrir que se burlaran todas las prohibiciones del inciso c) del artículo 6º o el propio artículo 6º en su totalidad.

El artículo 20, que es el antiguo artículo 19 del mensaje, contiene una fórmula para la transformación en empresas nacionales del capital extranjero. Con referencia a esto, el radicalismo, como lo señaló el diputado Hueyo, plantea la cuestión en cuanto al orden de prioridades en que debiera producirse esta renacionalización de las empresas extranjeras existentes en el país. Dentro de estas empresas entendemos que hay algunas que se vinculan con la transformación del país y que interesa que pasen a manos del capital nacional; pero que otras, por ser deficitarias o al margen del interés nacional, no tienen por qué tener la posibilidad de que se ofrezcan en transformación.

La ley tendría que haber contenido en el artículo 22 una norma que señalara como prioridad absoluta que deberían cumplir obligadamente para transformarse en empresas nacionales las actividades contempladas por los puntos 1, 2 y 4 del inciso c) del artículo 6º, porque se trata de aspectos fundamentales para el país.

Así mismo, debería establecerse que deben ser inmediatamente vueltas a manos del capital nacional aquellas radicaciones vinculadas con aspectos omitidos en esta enumeración del inciso c) del artículo 6º, como es el caso de los hidrocarburos, que fue señalado ayer por el señor diputado Alvarez Guerrero, y de los minerales radiactivos

para generación de energía nuclear, que está contenido en el artículo 4º de la ley mexicana de regulación de las inversiones extranjeras, que lo reserva de manera exclusiva al Estado.

El tiempo, que corre rápidamente, de acuerdo con lo que expresó recién el señor presidente, hace que deba abreviar estas observaciones. Pero no puedo dejar de señalar que en el artículo 25 se establece la posibilidad de acudir al ahorro nacional por parte de las empresas extranjeras. En esto debemos ser claros porque, si bien se prohíbe el aval bancario para una empresa extranjera, no está prohibido el aval del gobierno nacional, que en alguna manera podría venir a suplirlo o tener una jerarquía mayor. Tampoco se advierte de qué modo, en el supuesto de las sociedades en participación, cuando junto a una empresa extranjera interviene el gobierno nacional, puede apelarse a créditos externos que pudieran ser materia de beneficios para esa empresa con participación estatal.

No he de aludir a mayores argumentos. Creo que estas observaciones son fundamentales en cuanto trasuntan una forma de tratar la inversión extranjera, que algunos estiman favorece exclusivamente al país. De acuerdo con una tabla que tengo en mi poder, sobre los porcentajes de beneficio de la inversión extranjera en el mundo, en la década 1960/69, salvo en los países africanos cuyo desarrollo no podemos comparar con el de la Argentina, nuestra República fue el mercado donde mayor utilidad obtuvieron todos los capitales extranjeros del mundo. Ni en Europa lograron un rendimiento tan alto, pues en nuestro país fue del 13 por ciento, mientras que en el Viejo Mundo sólo alcanzó al 12,7 por ciento. Solicito se inserte esta tabla a esta altura de mi exposición.

**PORCENTAJE ANUAL COMPARADO DE BENEFICIOS OBTENIDOS  
DE LAS INVERSIONES DIRECTAS NORTEAMERICANAS EN EMPRESAS  
MANUFACTURERAS EN VARIOS PAISES, REGIONES, ARGENTINA  
Y PROMEDIO GENERAL DEL MUNDO 1960-1969**

Años	Promedio de beneficio sobre inversiones norteamericanas en todo el mundo %	En la Argentina %	En América latina sin contar la Argentina %	En el Canadá %	En Europa %	En Africa %
1960	12,3	22,2	9,7	8,7	16,7	15,8
1961	10,7	22,5	8,1	7,5	14,0	16,1
1962	11,0	11,3	10,8	9,0	11,7	28,3
1963	11,6	3,7	10,2	10,2	12,4	30,0
1964	12,2	13,2	10,6	9,8	14,2	24,4
1965	11,9	16,8	16,9	9,8	13,0	18,7
1966	10,8	12,8	11,1	9,2	11,2	14,7
1967	9,3	4,1	2,9	8,0	9,5	13,8
1968	10,4	11,2	11,4	8,3	10,6	11,4
1969	12,1	11,5	11,2	9,4	13,5	14,1
Promedio década 1960-1969:	11,2	13,0	10,2	9,0	12,7	18,7

FUENTES: *The Effects of United States and Foreign Investments in Latin America*. Publicado por FIEL, ídem 2-8. "Survey of Current Business."

Nota: En 1960 y 1961 el beneficio de las empresas norteamericanas en la Argentina era elevado, alcanzando 22,2 %, superior al promedio logrado en el mundo (12,3 %).

En consecuencia, por estos fundamentos y los ya expuestos por nuestro bloque, entendemos que deben ser recogidas estas modificaciones por la bancada mayoritaria.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Díaz Ortiz.

**Sr. Díaz Ortiz.** — Sin perjuicio del análisis en particular que habrá de hacer seguidamente otro miembro de nuestra bancada, con referencia a distintas objeciones que ha merecido el proyecto en consideración, he solicitado el uso de la palabra a fin de remarcar y de que quede asentada en el curso de este debate, la opinión de algunos miembros del Poder Ejecutivo, que fuera vertida en oportunidad de las reuniones que se llevaron a cabo en la sala de deliberaciones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Para ello me voy a permitir leer, textualmente, algunos de los párrafos y de las opiniones vertidas para que sirvan como marco de encuadramiento en la aplicación de este proyecto de ley de inversiones extranjeras.

En primer lugar, me referiré a la opinión del presidente del Banco Central, doctor Gómez Morales, en lo que hace al sentido de las inversiones extranjeras. Preguntado por el que habla sobre cuál debería ser el papel de estas inversiones en nuestro país, el doctor Gómez Morales contestó: «Tengo, señores diputados, mi opinión personal sobre el particular, que coincide —digamos así— con la del Poder Ejecutivo expresada mediante numerosos documentos. El capital extranjero tiene un papel complementario. Más del 90 por ciento del capital necesario para el desarrollo siempre será de origen nacional. La inversión extranjera siempre tiene una función complementaria, que está probablemente por debajo del 10 por ciento de la inversión total».

Agregó posteriormente el doctor Gómez Morales: «No queremos decir que la inversión extranjera no sea deseable, pero lo es en la medida en que se aplique a rubros prioritarios de interés para el país y que se incorpore con autenticidad, lo que no ha sucedido a menudo, cuando la participación extranjera real ha cubierto verdaderos negociados. A este respecto hay que establecer reglas de juego claras a fin de que el capital extranjero que ingrese al país pueda orientarse en la dirección que el país necesita».

De este modo el Poder Ejecutivo, a través de una de sus más altas expresiones, está definiendo dos marcos dentro de los cuales debe actuar la inversión extranjera. El primero se refiere al aspecto cuantitativo de la inversión. Queda perfectamente claro que la inversión extranjera tiene simplemente un sentido de complemento del ahorro nacional, lo cual desvirtúa una serie de afirmaciones recogidas por órganos de prensa, en el sentido de que se produciría en nuestro país una verdadera invasión de capitales extranjeros. El capital extranjero vendrá cuantitativamente a completar el ahorro interno, el cual, como ha quedado evidenciado en el curso de este

debate, es suficiente para impulsar el desarrollo nacional.

Por otro lado, la opinión del doctor Gómez Morales enmarca las inversiones extranjeras con relación al área de inversión, señalando en forma clara y expresa que esas áreas tendrán que ser prioritarias en función del interés nacional según los planes o medidas que el gobierno establezca. Es decir que la inversión extranjera no va a estar orientada indiscriminadamente o de acuerdo con los intereses de los inversores, sino que deberá dirigirse hacia aquellos sectores en los que el país necesite de alguna manera completar la inversión interna.

Por otra parte, preguntado sobre la rentabilidad adecuada que deben recibir las inversiones extranjeras, dice el doctor Gómez Morales con referencia al porcentaje de 12,5 que establece el proyecto: «Creo que ésta es una rentabilidad más que suficiente para un país de las características del nuestro, y en ese aspecto la ley no es en absoluto restrictiva. Esto se refiere fundamentalmente a la transferencia de utilidades al exterior. Una empresa puede lograr la rentabilidad que su negocio le permita; pero las transferencias están limitadas a estos porcentajes».

Esta opinión del doctor Gómez Morales responde a una preocupación que ha sido dominante en el curso de este debate, como es la posibilidad de que excedieran ese porcentaje remesas al exterior vinculadas al pago de *royalties*, patentes u otro tipo de derechos y que se concertaran entre los inversores y la empresa nacional en que los capitales se radiquen. Indudablemente, la claridad de las expresiones del doctor Gómez Morales disipa cualquier duda que al respecto pudiera existir.

Otro tema que ha constituido una preocupación dominante en el curso del debate, ha sido el que se refiere a la tecnología, que indiscutiblemente se encuentra tratada en forma incidental en este proyecto de ley. El diputado que habla señaló al doctor Gómez Morales lo siguiente: «Pareciera que ese 10 por ciento de capital complementario —al que se hizo referencia— debería dirigirse al aporte tecnológico. Ese es un aspecto que no se toca en la ley, o por lo menos se lo hace muy incidentalmente, salvo que fuera propósito del Poder Ejecutivo hacer un proyecto de ley especial con referencia a la asistencia tecnológica». El señor diputado Rabanal sostuvo en ese momento que la tendencia moderna se dirige a sancionar leyes específicas sobre tecnología, a lo que el doctor Gómez Morales...

**Sr. Rabanal.** — Si me permite, señor diputado...

**Sr. Díaz Ortiz.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Rabanal.** — Nuestra insistencia iba dirigida a que en la parte final del artículo 13 se hiciera un agregado a fin de que dentro del concepto de utilidad quedaran incluidas las remesas que entre sucursales y casas matrices se realizan por aplicación de tecnología.



**Sr. Díaz Ortiz.** — Recuerdo al señor diputado que, aún antes de la presentación de este proyecto por parte del Poder Ejecutivo, el diputado que habla y otros diputados de esta bancada hemos elaborado un proyecto que, precisamente, trata el tema, es decir, el control de las remesas al exterior por pagos en ese concepto.

**Sr. Rabanal.** — Con su permiso, quiero recordar que el señor diputado Díaz Ortiz, otros señores diputados y el que habla estuvieron intentando una redacción nueva para perfeccionar la disposición, lo que no fue aceptado.

**Sr. Díaz Ortiz.** — Pero eso quedó cubierto con el artículo 36 del proyecto, que pone a cargo del Poder Ejecutivo la obligación de redactar y presentar a este Congreso un proyecto de ley que contemple íntegramente todas las cuestiones referentes a la tecnología, incluyendo el régimen de remesas al exterior por pagos en ese concepto. Y como conviene hacerlo en forma expresa, voy a leer también la opinión del doctor Gómez Morales con relación a los pagos o remesas por estos conceptos. Dijo Gómez Morales: «Participo totalmente de esa inquietud (que es precisamente la que suscitan las remesas indiscriminadas por concepto de tecnología). Creo que más grave que la transferencia de dividendos es el pago de *royalties*. A través de ese circuito el país ha sido succionado de manera extraordinaria».

Es decir, que esto que ha sido preocupación de la bancada radical, del señor diputado Balestra y, además, concretamente, de los que hemos presentado un proyecto de ley en ese sentido, es preocupación unánime y dominante. Naturalmente, en el plazo de sesenta días, que no es excesivo para poder estudiar y concretar un proyecto de ley que contemple perfectamente todos esos aspectos, tendremos, sin duda alguna, y probablemente por un pronunciamiento unánime, una ley que cubra todas esas posibles dificultades y elimine las condiciones propicias para semejante evasión de divisas y de riqueza nacional.

Con estos tres aspectos, referido uno al ámbito de la inversión, el otro al *quantum* de la inversión y el tercero a la tecnología, que son aspectos generales de esta ley y el espíritu que la anima, doy por terminada mi exposición.

**Sr. Presidente** (Busacca). — La Presidencia ruega a los señores diputados que observen el artículo 163 del reglamento.

Tiene la palabra el señor diputado Mombelli.

**Sr. Mombelli.** — Señor presidente: me permitiré hacer algunas consideraciones sobre el proyecto de ley de radicación de inversiones extranjeras.

Este proyecto de ley comienza por establecer las formas de radicación del capital extranjero y excluye expresamente, en el inciso c) del artículo 1º, a los contratos de uso de tecnología, de transporte y de seguros. Esto supone que los aportes de capital correspondientes no gozarían

de los beneficios que otorga el proyecto de ley, con lo cual sólo se podría contratar tecnología a través del pago de la regalía correspondiente y, en consecuencia, no habría posibilidades de absorber procedimientos tecnológicos y nacionalizarlos. No debe olvidarse que su incorporación como capital en los aportes de una empresa, los sujetaría a los resultados económicos que en cada ejercicio obtuviera aquélla, o sea a las pérdidas o a las ganancias, y no al pago de regalías permanentes a través del simple arrendamiento.

En el inciso a), punto 2, del mismo artículo se establece que esta ley regirá para las radicaciones de bienes de capital y sus repuestos. Damos por descontado que tales bienes deberán ingresar al país con el pago del arancel correspondiente.

La clasificación que se realiza de los distintos tipos de empresa de acuerdo con el origen del capital, entendemos que va más allá de los supuestos que en la práctica determinan los elementos decisivos en el manejo de la empresa. Tal magnitud exigida para clasificar como nacional a esta última, creemos que en nada favorece una oportuna y flexible asociación de capitales nacionales como lo hace el inciso c) del artículo 2º.

Por otra parte, un análisis sintético de los tres tipos de empresas clasificadas reduce ese número sólo a dos: los contemplados en los incisos a) y b) del artículo 2º, con lo cual el capital extranjero va a incursionar en la práctica dentro de estas definiciones y, en consecuencia, su participación en el capital estará, en general, dentro de los porcentajes del 49 y el 51 por ciento, limitando una negociación mejor para el inversor nacional. Entendemos, por lo tanto, que la clasificación debería reducirse a dos, ampliando a no más del 60 por ciento y 65 por ciento los márgenes para definir a una empresa nacional o extranjera en cada caso.

El artículo 4º exige la aprobación del Honorable Congreso de la Nación para aquellas radicaciones contempladas en el inciso a) del artículo 2º. Nos preocupa la larga tramitación que exigiría tal requerimiento, agregado a la que deberá realizar antes el Poder Ejecutivo, con lo cual es posible que frente a inversiones necesarias para la Nación tal exigencia las desaliente.

Otro aspecto que no está contemplado en el proyecto es el que se refiere a la publicación de las radicaciones solicitadas a la autoridad de aplicación, a los efectos de que la industria instalada pueda enterarse y oponer los argumentos que entienda necesarios antes de la resolución final que se tome, de acuerdo con el inciso h) del artículo 5º.

Respecto de las actividades en las que no se autorizarán nuevas radicaciones, estamos de acuerdo en general con las prohibiciones establecidas en el artículo 6º. Preocupa que algunas inhiban las posibilidades de desarrollo de sectores que, por necesidades en el dimensionamien-

to de sus escalas de producción, requieren de grandes inversiones que el país en estos momentos no dispone o, por lo menos, no puede distraer como único aportante.

El inciso d) del mismo artículo incluye en tal prohibición a la adquisición de todo tipo de participación patrimonial y de fondo de comercio existentes en el país y pertenecientes a empresas locales. La excepción en el caso de existir un proceso de liquidación por quiebra no es justamente la más apropiada para las condiciones de negociación del capital nacional, ya que frente a tal hecho consumado, el inversor extranjero podrá exigir mejores condiciones, por la debilidad económica y jurídica del inversor local. Por lo tanto, debe extenderse a una etapa previa a la quiebra o cesación de pagos la oportunidad del inversor nacional para ofrecer una asociación o una venta total de su participación al inversor extranjero.

El punto 7 del inciso c) del artículo 6º prohíbe las radicaciones en actividades agrícola-ganaderas y forestales, salvo las que incorporen tecnología nueva de especial interés para la economía nacional, a juicio de la autoridad de aplicación. Y el punto 8 del mismo inciso expresa la prohibición en materia de pesca, excepto cuando posibilite el ingreso de la producción a mercados internacionales cerrados.

Sobre este aspecto, de acuerdo con lo expresado por los puntos citados, manifiesto que nuestra provincia del Chubut, netamente productora de bienes ganaderos y forestales, debe ser tenida en cuenta específicamente, para su total desarrollo. La pesca y demás riquezas del mar, que en nuestra provincia están brindándose exuberantemente, requieren una política especial, sin más demora, para lograr su integral explotación.

El artículo 20 legisla sobre las radicaciones existente. A las que no opten por el sistema proyectado se les impone lo que en la práctica es una pena por no haber previsto esta nueva legislación. Sin duda esto no favorece la estabilidad jurídica necesaria que requiere el acceso de recursos externos. El espíritu mismo del artículo 34 del proyecto toma en cuenta tal orden jurídico, que parecería ser contradictorio con el del artículo 20.

Sugerimos que para aquellas radicaciones que opten por continuar con el régimen bajo el cual se efectuaron, se aplique el artículo 13 del proyecto, a los efectos de la transferencia de utilidades.

El artículo 17, en su segundo párrafo, limita el endeudamiento por todo concepto al crédito interno de corto plazo. Inquieta entonces el hecho de que el inversor extranjero no pueda realizar compras en plazas de bienes de capital nacionales con el financiamiento usual de cinco años o inmuebles por términos mayores. Por ello, creemos que el espíritu del legislador se refería a que tal limitación debe serlo para el crédito bancario. Todo este sistema propuesto

legisla bajo la idea general de que el mercado de capitales sólo existe con la participación de las grandes empresas llamadas multinacionales, de gran poder político y económico, y hacia ellas está dirigido el control estricto proyectado. Por lo tanto, generaliza y por supuesto excluye la posibilidad de acceso de aquellos capitales que en el orden internacional tienen pequeños o medianos ahorristas que se interesan también por inversiones fuera de su país, especialmente cuando se trata de asociaciones con capitales locales del país receptor. Este tipo de inversión externa, que no pretende participar en las decisiones nacionales, debería ser considerada y especialmente atraída.

Por último, no he querido dejar de referirme a lo acontecido estos días, en lo que respecta a manifestaciones hechas por el encargado de negocios de los Estados Unidos, que dieran origen a una declaración de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamentos expresados por el señor diputado Busacca, a los que adhiero en su totalidad.

Es por ello que este Partido de Acción Chubutense viene a repudiar las expresiones del funcionario mencionado, ya que dada la madurez política alcanzada por nuestro país corresponde que por fin rijamos nuestro destino, sin injerencias foráneas de ninguna naturaleza. Nuestro Partido de Acción Chubutense reafirma una vez más su firme convicción de la necesidad de lograr la independencia económica de nuestra patria.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Tiene la palabra el señor diputado Palacio Deheza.

**Sr. Palacio Deheza.** — Señor presidente: he recogido con suma atención las opiniones vertidas a lo largo del debate sobre este proyecto de ley, que es de la máxima importancia.

A esta altura advierto que la cuestión puede centrarse en dos proyectos existentes: uno de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, y otro presentado en este recinto por el señor diputado Balestra. De modo que como existen dos proyectos, aun cuando el señor diputado Balestra no solicitó en forma expresa el tratamiento del que presentara, sino que sugirió que las opiniones contenidas en ese proyecto se debían atender, voy a referirme a esa iniciativa, por cuanto es el cuerpo más orgánico de observaciones. Posteriormente voy a contestar las observaciones que han formulado otros señores diputados, incluyendo sugerencias concretas como las de los señores diputados Falabella, Alvarez Guerrero y Rabanal.

El proyecto del doctor Balestra, comparado con el remitido originariamente por el Poder Ejecutivo nacional y luego tomado en su mayoría por la comisión que estudió este tema, parte de conceptos diferentes en cuanto al modo de visualizar la inversión extranjera, aunque concurra en el fondo a un tratamiento similar. Así, por ejemplo, el artículo 1º del proyecto del Poder Eje-

cutivo puede comparárselo con el artículo 3º del proyecto del señor diputado Balestra, pues guardan una gran similitud si bien en el segundo proyecto se denominan modos de inversión.

El artículo 2º del proyecto del Poder Ejecutivo no tiene concordancia con artículo alguno del proyecto del señor diputado Balestra. Este artículo determina qué se considera por empresas de capital nacional, cuáles son las empresas de participación de capital nacional y extranjero y, finalmente, qué son empresas de capital extranjero.

El artículo 3º del despacho de la comisión determina qué se entiende por inversor extranjero. El proyecto del señor diputado Balestra también lo hace, pero la clasificación que él pretende caracteriza al inversor extranjero por el lugar de constitución, sede principal de la dirección, lugar de reunión de la asamblea, asiento de los negocios, vinculación con otras empresas y todo otro elemento que permita demostrar la procedencia extranjera de las decisiones y el control efectivo de las inversiones. El despacho de la comisión se remite en el artículo 2º al «poder de decisión», que es una fórmula más comprensiva y no tan enumerativa como la anterior.

Con respecto al artículo 6º, que es también fundamental, referido a las prohibiciones para la autorización de nuevas radicaciones, que el señor diputado Balestra denomina en su proyecto «límites de autorización», resulta mucho más amplio el texto despachado por la comisión en cuanto aplica un tratamiento más severo a los conceptos allí enunciados.

El señor diputado Balestra desarrolla también una tesis referida al lugar del domicilio, que se encuentra fundamentalmente enunciada en el artículo 3º del despacho de la comisión. El despacho sostiene que el domicilio es el definido por el artículo 89 del Código Civil, mientras que el señor diputado Balestra pretende en su proyecto que el domicilio sea el del artículo 44 del Código Civil. Si se atiende, en primer lugar, a lo que establecen los incisos a) y b) del artículo 3º, referidos a toda persona física o a toda persona jurídica a las que debe otorgársele un domicilio, resulta claro que se está optando entre las dos fórmulas del Código Civil por una definida, que me parece la más aceptable, puesto que consulta al lugar donde se encuentra el centro efectivo de decisión de la inversión. Considero que no podemos modificarlo.

**Sr. Balestra.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

**Sr. Palacio Deheza.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Balestra.** — Quiero aclarar al respecto que el criterio con que nosotros propusimos esta modificación deriva de una vieja discusión en el derecho internacional privado, que se desarrolló fundamentalmente entre la delegación argentina, por un lado, y las delegaciones uruguaya y paraguaya, por el otro, en el Congreso de Derecho Internacional de Montevideo de los

años 1939-1940, según la cual se quiso hacer prevalecer el criterio del asiento principal de los negocios sobre el de la dirección y administración principal, precisamente porque algunos países limítrofes tenían la influencia de entidades financieras que actuaban en el extranjero.

Debe tenerse en cuenta que en la medida en que se fija el criterio de la dirección y administración principal, se evita una solución discutible, como es la del asiento principal de los negocios, que puede ser de difícil determinación. Los ejemplos clásicos de la doctrina son las empresas de líneas de ferrocarril o de cables submarinos, pero más modernamente esta situación podría hacerse extensiva a cualquier tipo de empresas multinacionales, en las que podría discutirse que tienen varios centros de los negocios en tantos países como actúan. Esto, entonces, sería discutible y hasta de decisión judicial.

En cambio, la dirección y administración principal es lo único cierto, sin perjuicio de que para la actividad de las filiales se considere que tienen un domicilio a los efectos de los actos comprendidos en el objeto habitual de la institución.

Ese ha sido el criterio que hemos seguido. Agradezco al señor diputado la interrupción que me ha concedido.

**Sr. Palacio Deheza.** — Agradezco la aclaración del señor diputado Balestra, pero nos permitimos sostener como más conveniente el concepto del domicilio real del centro de decisión, porque en esa forma se individualiza más claramente quién es el inversor, lo cual por otra parte coincide con lo que el señor diputado sostiene en su artículo 1º, puntos 2, 3, 4 y 6, que es el criterio del domicilio real.

Continuando con el desarrollo del tema, vamos a entrar a considerar las objeciones que se han formulado en el curso de este debate.

En primer lugar, a fin de no alargar demasiado esta exposición, y consultando la opinión predominante de la bancada que represento y también lo que se ha dicho en la comisión conjunta que trató el tema, considero que lo propuesto por el doctor Falabella ha sido realmente una forma feliz. Ella nos va a permitir complementar este proyecto con un profundo sentido nacional y popular, ya que vamos a sacar de las manos de la inversión extranjera todo cuanto se refiere a publicidad, radioemisoras, estaciones de televisión, diarios, revistas, editoriales y otros medios de comunicación masiva, atendiendo a que precisamente el instrumento de penetración cultural y de dominación extranjera descansa sobre estos medios.

Siendo esto así, aceptamos la proposición del bloque de la Unión Conservadora, con un pequeño agregado, a fin de iniciar el artículo 20 con la siguiente prescripción: «Las radicaciones de capital extranjero anteriores a la sanción de esta ley que se hallen directa o indirectamente invertidos en los sectores del artículo 6º, inciso c), subincisos 1 y 4, podrán ser intervenidas por

la autoridad de aplicación, la que determinará en su caso seguidamente la procedencia y conveniencia de su nacionalización o expropiación a proponer al Congreso de la Nación». El resto del artículo no se modifica. En cuanto a la propuesta del señor diputado Alvarez Guerrero, que solicita que se agregue al artículo 13 del proyecto un párrafo que diga: «A los efectos del cómputo de las utilidades remitidas se incluirán los pagos efectuados entre casa central o matriz y sucursal o subsidiaria en la Argentina, o entre inversor extranjero y empresa en la que tenga participación radicada en el país, en concepto de regalías u otros pagos por uso de tecnología», considero, como también lo expresara el señor diputado Gualco y aclarara el señor diputado Díaz Ortiz, que este agregado debe ser materia de la ley de tecnología. También en concordancia con el artículo 21 y siguientes del Pacto Andino, la tecnología y la radicación conforman grupos distintos, siendo la primera una subespecie genérica del pacto, que la discrimina bastante bien, a mi juicio, del concepto de radicación de capitales.

Por estas razones, no considero pertinente que se incluya la redacción propuesta por el señor diputado Alvarez Guerrero como agregado al artículo 13 del proyecto.

En cuanto a la limitación que propone el señor diputado Arana para precisar la redacción del inciso h) del artículo 5º, considero que el texto propuesto por la comisión es bastante claro y que en la forma en que ha quedado redactado el artículo no va a ocurrir el desplazamiento actual o futuro del mercado de empresas de capital nacional.

Ello no implica en modo alguno que cuando la empresa de capital nacional requiera de las autoridades pertinentes mayores limitaciones en defensa de su actuación, la autoridad administrativa o el Congreso de la Nación no estarán dispuestos a acordarlas, porque precisamente ése es nuestro punto de vista.

También propone el señor diputado Arana, y en ello coincide el señor diputado Rabanal, que sean más severas las prohibiciones a que se refiere el artículo 6º sobre radicaciones para actividades agrícola-ganaderas y pesca. Por poco que se medite, encontramos que en el campo de las actividades agrícola-ganaderas y forestales existe una importantísima gama de progresos que las mismas naciones más desarrolladas están introduciendo para hacer frente al problema que ellas encaran, y que nosotros afortunadamente no, del exceso de población. Como tienen que alimentar a esa población tratan de incorporar nuevas tecnologías, sobre todo en el campo de la genética, materia en la cual nosotros estamos menos avanzados.

La autoridad de aplicación es la que juzgará si quedan entre las prohibiciones o las excepciones del artículo 6º las nuevas tecnologías cuya radicación se solicita.

**Sr. Arana.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

**Sr. Palacio Deheza.** — Con mucho gusto, señor diputado.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Arana.

**Sr. Arana.** — Precisamente, ésa es la preocupación del diputado que habla, que también ha expresado coincidentemente el señor diputado Rabanal.

Mediante el mecanismo de aplicación del artículo se crea una facultad poco menos que indiscriminada, pues con el solo arbitrio de incorporar tecnología, queda abierta la posibilidad para la inversión de capitales extranjeros en tierras. La preocupación que ha manifestado este diputado es que este recurso —como bien se ha señalado— tendrá en los años venideros una gravitación estratégica de extraordinaria trascendencia e importancia.

No existen en el mundo entero otros ochenta millones de hectáreas en zona templada —como las que dispone la República Argentina— que puedan destinarse intensivamente a la producción de alimentos con una muy baja tasa de inversiones. De allí mi preocupación de que, por intermedio de la vía que esta ley puede abrir, se inviertan capitales extranjeros y se desnacionalice el sector. Porque todas las leyes que el Poder Ejecutivo ha remitido al Parlamento sobre la materia agraria no prevén en manera alguna el régimen futuro de tenencia de la tierra. Esta puede ser poseída por personas físicas o jurídicas —entre otras, sociedades anónimas—, sin discriminarse incluso hasta ahora la cantidad de tierra que se puede poseer. Es decir que sería relativamente sencillo canalizar inversiones para que se radiquen en este sector económico.

Esto ya está sucediendo en otros lugares del mundo. En América latina, específicamente ha acontecido en Brasil. Los periódicos de fecha reciente han recogido una inversión efectuada por capitales italianos, que han adquirido 375.000 hectáreas. El mismo problema también se ha dado en Australia, donde realmente se ha generado toda una conmoción que ha obligado a instrumentar las defensas necesarias para evitar la desnacionalización del sector.

Los casos que he citado corroboran mi preocupación: en los próximos años, a muy corto plazo, los alimentos constituirán elementos indispensables para la satisfacción de las necesidades de una población que crece en función geométrica.

**Sr. Palacio Deheza.** — Muchas gracias por su acotación, señor diputado Arana, pero indudablemente la cuestión que usted plantea debe ser materia de una ley de colonización que contemple en forma expresa el uso de la tierra. Por nuestra parte, le aclaro que ya estamos advertidos acerca de la necesidad de establecer limitaciones y regulaciones en esta materia, a

fin de no caer nosotros también en la situación que ha referido.

El señor diputado Rabanal también se ha referido a las utilidades efectivamente radicadas en el país, sosteniendo que por tal vía puede continuar el proceso de desnacionalización de empresas, hasta inclusive llegar a servir para la adquisición de bienes que concretamente debían estar en manos argentinas porque así conviene a la política nacional de amplio sentido popular que estamos propiciando con el consenso unánime de los sectores representados en esta Cámara.

Este tema es de suma importancia, lo atendemos y expresamos una opinión coincidente con la del señor diputado Rabanal. Por ello, le solicito se sirva formular concretamente el agregado a incorporar a continuación del texto del artículo 15 del despacho de la comisión.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Tiene la palabra el señor diputado Rabanal.

**Sr. Rabanal.** — Respecto al artículo 15, considero que debe agregarse, luego de «autoridad de aplicación», lo siguiente: «con excepción de los sectores enumerados en el inciso c) del artículo 6º», puesto que, en definitiva, son los sectores de la economía que queremos preservar, por entender que son los fundamentales para nuestra soberanía.

Usted recuerda, señor diputado Palacio Deheza, que nuestro bloque planteó, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la necesidad de incluir a los hidrocarburos, a los minerales radiactivos y a la producción de energía nuclear en esos sectores donde no se autoriza la inversión extranjera.

**Sr. Palacio Deheza.** — Prosiguiendo con mi exposición, expreso que me parece correcta la inclusión que propone el señor diputado Rabanal en el artículo 15 *in fine*, que dice: «con excepción de los sectores enumerados en el inciso c) del artículo 6º».

**Sr. Presidente (Busacca).** — Oportunamente será considerada la inclusión propuesta por el señor diputado Rabanal, es decir, cuando se trate en particular el citado artículo 15.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Palacio Deheza.

**Sr. Palacio Deheza.** — Estamos de acuerdo con la solicitud del señor diputado Rabanal de suprimir el segundo párrafo del punto 3 del inciso c) del artículo 6º, que dice: «No se considerarán nuevas radicaciones las incluidas en el inciso c) del artículo 2º».

Entiendo que es necesario aclarar otro punto fundamental de esta cuestión, pues tal como se han planteado las cosas parecería ser que nuestro sector está propiciando determinadas políticas internas. Queremos establecer que la ley 14.222, sancionada el 21 de agosto de 1953, en sus artículos 10 y 12 preveía un sistema de transformación y de repatriación del capital que era mucho más amplio y, por lo tanto, menos

detallado que el que prevén los artículos 7º y 11 del proyecto que estamos considerando.

Posteriormente, el decreto reglamentario de la ley 14.222 coincide exactamente con los lineamientos generales de lo que se establece en el dictamen que ha realizado la comisión.

Finalmente, lo que se estableciera en los puntos de coincidencias programáticas de los partidos —el punto 8, referido al tratamiento del capital externo— también está totalmente contemplado en el espíritu de esta ley.

Consideramos, señor presidente, que este proyecto forma parte integral de esas coincidencias programáticas y que debe ser aprobado por la Honorable Cámara.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Por Secretaría se dará lectura del artículo 163 del reglamento de la Honorable Cámara, y luego se llamará para votar.

**Sr. Secretario (Rocamora).** — Dice así:

Ningún diputado podrá ausentarse durante la sesión sin permiso de la Presidencia, quien no lo otorgará sin consentimiento de la Cámara, en el caso que ésta debiese quedar sin quórum legal.

**Sr. Balestra.** — Pido la palabra, señor presidente, para formular una aclaración.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado Balestra.

**Sr. Balestra.** — Señor presidente: nosotros hemos presentado un proyecto que el señor diputado Palacio Deheza ha tenido la gentileza de analizar en sus aspectos generales.

En la sesión de ayer hemos manifestado que en el caso más probable de que la Honorable Cámara tratase el proyecto del Poder Ejecutivo íbamos a hacer llegar por escrito, a título de colaboración, las modificaciones de técnica legislativa que en detalle enunciamos al final de nuestra exposición.

Desearía no repetir esos conceptos porque las modificaciones las he entregado en propias manos del señor diputado Díaz Ortiz, y no sé si la comisión ha tenido tiempo para considerarlas.

**Sr. Presidente (Busacca).** — No se encuentran en la mesa de la Presidencia las propuestas de modificación a que alude el señor diputado.

**Sr. Balestra.** — Me permito insistir, señor presidente, para abreviar el trámite, porque las modificaciones las entregué directamente en la comisión al señor diputado Díaz Ortiz. Supongo que él las ha hecho llegar a la Presidencia.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Se va a llamar para votar.

—Mientras se llama para votar:

**Sr. Presidente (Busacca).** — Para una aclaración, tiene la palabra el señor diputado Falabella.

**Sr. Falabella.** — Deseaba aprovechar el tiempo que insume el llamado para votar...

**Sr. Presidente (Busacca).** — Mientras se llama para votar no se pueden realizar exposiciones.

**Sr. Falabella.** — Se trata de una pequeña indicación, casi insignificante.

**Sr. Presidente** (Busacca). — La Presidencia señala al señor diputado que se está llamando para votar, por lo que le solicita que sea muy breve.

**Sr. Falabella.** — En el artículo 6º figura como punto 9 del inciso c) una cláusula que debería ir como párrafo aparte.

**Sr. Presidente** (Busacca). — El señor diputado podrá formular la observación cuando se trate el artículo 6º.

Se va a votar en general el despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas sobre régimen de radicación de capitales extranjeros.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Busacca). — En consideración en particular el artículo 1º.

Por Secretaría se dará cuenta de las observaciones.

**Sr. Secretario** (Rocamora). — En el dictamen de la minoría suscrito por el diputado Moral se propone suprimir el artículo 1º.

**Sr. Presidente** (Busacca). — ¿Acepta la comisión?

**Sr. Palacio Deheza.** — No, señor presidente.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Se va a votar el artículo 1º.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Balestra.** — Tenía un pedido concreto...

**Sr. Presidente** (Busacca). — La Presidencia lo lamenta, pero tendría que haber sido formulado oportunamente, porque ahora el artículo ya ha sido votado.

**Sr. Balestra.** — Es que no he tenido tiempo para pedir la palabra, porque apenas concluyó la lectura del señor secretario se votó.

**Sr. Presidente** (Busacca). — La Presidencia no tiene solución que dar porque el artículo ya se ha votado.

Si el señor diputado desea que su observación conste en el Diario de Sesiones, la Presidencia autorizará la inserción.

En consideración el artículo 2º.

**Sr. Balestra.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Balestra.

**Sr. Balestra.** — El artículo 2º limita la posibilidad del ingreso del capital extranjero al país por cuanto establece el porcentaje tomando el modelo del Pacto Andino.

**Sr. Presidente** (Busacca). — La Presidencia sugiere al señor diputado que proponga concretamente la modificación.

**Sr. Balestra.** — Propongo que se suprima.

**Sr. Presidente** (Busacca). — ¿Acepta la comisión?

**Sr. Palacio Deheza.** — No, señor presidente.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Se va a votar el artículo 2º.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Busacca). — En consideración el artículo 3º.

Tiene la palabra el señor diputado Balestra.

**Sr. Balestra.** — Con respecto al artículo 3º, y especialmente al inciso c), relativo al domicilio, dejo planteada la salvedad que acabo de formular y que la comisión conoce.

**Sr. Presidente** (Busacca). — ¿Acepta la comisión el pedido del señor diputado Balestra?

**Sr. Palacio Deheza.** — Por lo expuesto anteriormente, no lo acepta.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Se va a votar el artículo 3º.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Busacca). — En consideración el artículo 4º.

Por Secretaría se dará lectura de las observaciones formuladas.

**Sr. Secretario** (Rocamora). — El dictamen de minoría suscrito por el señor diputado Moral propone la siguiente redacción para el artículo 4º:

...a la autoridad de aplicación, la que efectuará la evaluación correspondiente. Las radicaciones se instrumentarán por medio de un contrato de radicación entre dicha autoridad y los inversores extranjeros, el que deberá ser sometido a la aprobación del Poder Ejecutivo nacional. La autoridad de aplicación preparará y dará a publicidad modelos de contratos y condiciones generales que luego se adaptarán en cada caso a las posibilidades de cada sector. En todo caso se asegurará la igualdad de posibilidades a todos los posibles oferentes, debiéndose proceder, siempre que se establezcan limitaciones al número de posibles radicaciones, a licitación pública.

El señor diputado Lima propone se modifique el segundo párrafo del artículo 4º en la siguiente forma:

Las radicaciones se instrumentarán por intermedio de un contrato de radicación entre dicha autoridad y los inversores extranjeros, que deberá ser sometido en todos los casos a la aprobación del Honorable Congreso de la Nación.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Arana.

**Sr. Arana.** — En nombre del bloque de la Alianza Popular Revolucionaria, deseo dejar constancia del pensamiento expuesto con relación al inciso h), sobre la no simultaneidad de inversiones en áreas que ya estén ocupadas por el capital nacional.

**Sr. Presidente** (Busacca). — ¿La comisión acepta las modificaciones formuladas?

**Sr. Palacio Deheza.** — No, señor presidente.



**Sr. Presidente** (Busacca). — Se va a votar el artículo 4º.

— Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Busacca). — En consideración el artículo 5º.

Por Secretaría se dará lectura del dictamen de minoría suscrito por el señor diputado Moral.

**Sr. Secretario** (Rocamora). — Las observaciones se refieren a los incisos h) e i) y dicen así:

- h) Que no signifique condiciones preferentes que lleven al desplazamiento actual o futuro del mercado de empresas de capital nacional;
- i) Que garantice una adecuada estructura financiera para cumplir con la evolución de la actividad a que se destine.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Balestra.

**Sr. Balestra.** — Señor presidente: propongo que la determinación prioritaria de que habla el inciso a) de este artículo, de las actividades y zonas geográficas, no se haga por el Poder Ejecutivo sino que sea resorte del plan nacional de desarrollo que sancione el Honorable Congreso.

Además, que en el inciso g) se mantenga la prescripción de la ley 19.151 en cuanto a que el personal argentino que participe de las sociedades receptoras de capital extranjero sea del 85 por ciento, y que no se suprima este mínimo como se hace en el proyecto del Poder Ejecutivo.

**Sr. Presidente** (Busacca). — ¿Acepta la comisión las observaciones formuladas?

**Sr. Palacio Deheza.** — Esto fue expresamente debatido en la comisión y no fue aceptado. Por lo tanto, no se aceptan las observaciones formuladas.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Se va a votar el artículo 5º.

— Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Busacca). — En consideración el artículo 6º.

Por Secretaría se dará lectura de las modificaciones que se proponen en el dictamen de minoría suscrito por el señor diputado Moral y de otras observaciones formuladas.

**Sr. Secretario** (Rocamora). — El dictamen de minoría del señor diputado Moral propone la siguiente redacción para el inciso c) del artículo 6º, en los puntos 1 y 5:

- c) 1. Actividades relacionadas con la defensa y seguridad nacional, como no sea en asociación con empresas del Estado u otros organismos oficiales;
- 5. ... de su propia elaboración. Se permitirán radicaciones de empresas que aporten nuevas tecnologías de distribución y comercialización, o empresas que se especialicen en

la exportación de productos argentinos, pudiendo complementar esta actividad con las de importación y comercialización interna. En ambos casos estas radicaciones estarán sujetas a un plan de nacionalización que las convierta en empresas con participación de capital nacional y extranjero en el término de 15 años.

El señor diputado Insúa presenta una modificación que dice así:

Artículo 6º — Además de cumplimentar lo establecido por el artículo 5º, las radicaciones obedecerán exclusivamente a su inversión en las áreas productivas que el Poder Ejecutivo nacional establezca. A tal fin el mismo establecerá en forma precisa las condiciones a cumplimentar, tanto de proyecto, diseño, criterio técnico aprobado, ubicación establecida, monto estimado, porcentaje del mismo frente a la inversión total, plazo mínimo de inversión sin reintegro, porcentaje de reinversión de las utilidades líquidas y realizadas, características de la conducción del proceso directivo y productivo y todo aquello que signifique clarificar y dimensionar las obligaciones y derechos a ejercitar por el inversor extranjero.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Arana.

**Sr. Arana.** — Solicito que se suprima del subinciso 7), inciso c), de este artículo la parte que dice: «salvo las que incorporen tecnología nueva de especial interés para la economía nacional, a juicio de la autoridad de aplicación».

**Sr. Presidente** (Busacca). — ¿La comisión acepta algunas de las observaciones formuladas?

**Sr. Palacio Deheza.** — No, señor presidente.

**Sr. Rabanal.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Rabanal.

**Sr. Rabanal.** — En primer lugar, solicito que dentro de los servicios públicos enumerados en el subinciso 2 del inciso c) se agregue «gas».

Además, solicito que en el inciso c) se agregue un nuevo subinciso con el siguiente texto: «Hidrocarburos, explotación de minerales radiactivos y generación de energía nuclear».

Por otra parte, adhiero a la supresión solicitada por el señor diputado Arana.

**Sr. Presidente** (Busacca). — ¿La comisión acepta las modificaciones propuestas por el señor diputado Rabanal?

**Sr. Palacio Deheza.** — La comisión acepta la inclusión del servicio público de gas en el subinciso 2 del inciso c). Pero no acepta lo que se refiere a hidrocarburos, minerales radiactivos y energía nuclear, porque en esos sectores se requiere elevada tecnología que puede ser incorporada.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Balestra.

**Sr. Balestra.** — Propongo la supresión del inciso c) del artículo que consideramos, por ser materia del plan nacional de desarrollo en cuya elaboración deberán participar las provincias.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Falabella.

**Sr. Falabella.** — Deseo proponer una modificación formal. No corresponde enumerar como subinciso del inciso c) el punto 9, que expresa: «Toda incorporación de nuevos sectores a la lista precedente deberá disponerse por ley», porque este párrafo no constituye un término más de la enumeración, sino que se refiere al contenido del inciso en su totalidad. Por lo tanto, entiendo que debe figurar como último párrafo del inciso. En síntesis, la modificación consistiría en suprimir «9».

**Sr. Presidente** (Busacca). — ¿Acepta la comisión las modificaciones propuestas por los señores diputados Balestra y Falabella?

**Sr. Palacio Deheza.** — La comisión no acepta la supresión del inciso c), propuesta por el señor diputado Balestra.

En cambio, entiendo que la proposición del señor diputado Falabella es sumamente aclaratoria; la comisión la acepta. En consecuencia, el inciso c), luego de la enumeración que contienen los subincisos 1 a 8, diría: «Toda incorporación de nuevos sectores a la lista precedente deberá disponerse por ley».

**Sr. Presidente** (Busacca). — Se va a votar el artículo 6º del dictamen con las modificaciones aceptadas por la comisión.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Busacca). — En consideración el artículo 7º.

Por Secretaría se va a dar lectura de las observaciones formuladas.

**Sr. Secretario** (Rocamora). — En su dictamen de minoría el señor diputado Moral propone la siguiente redacción del encabezamiento del artículo 7º y del inciso a):

Artículo 7º — Actividades agrícola-ganaderas y forestales, a menos que aporten nuevas tecnologías:

- a) Un programa de transformación en empresa nacional o de participación de capital nacional y extranjero.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Balestra.

**Sr. Balestra.** — En el artículo que consideramos hay un error material. Donde dice «para las actividades no enumeradas en el artículo 6º, inciso c), la autoridad de aplicación dará preferencia a las radicaciones que se soliciten para ser efectuadas en empresas del tipo indicado en el artículo 2º, incisos b) y c) ...», entiendo que debe decir «incisos a) y b)», por cuanto esos incisos se refieren a las empresas de capital extranjero y a las empresas con participación de capital nacional y extranjero, y el propósito de la ley es dar preferencia a las radicaciones que se efectúen en empresas de capital nacional.

**Sr. Presidente** (Busacca). — ¿Acepta la comisión la observación formulada por el señor diputado Balestra?

**Sr. Palacio Deheza.** — Sí, señor presidente; se trata de un error tipográfico que ya fue observado en la comisión y que se ha deslizado en la transcripción. Pero no acepta la propuesta por el señor diputado Moral.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Con la modificación aceptada por el señor miembro informante, se va a votar el artículo 7º.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Busacca). — En consideración el artículo 8º.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Busacca). — En consideración el artículo 9º.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Busacca). — En consideración el artículo 10.

Tiene la palabra el señor diputado Falabella.

**Sr. Falabella.** — No voy a hacer una observación concreta, sino simplemente a preguntar al señor miembro informante de la comisión si no hubiera debido incluirse en este artículo, hasta con cierto énfasis, un inciso que comprendiese específicamente a los institutos de investigación, los institutos científicos y los laboratorios que tuviesen conexión con las necesidades científicas y técnicas del país.

**Sr. Falú.** — Si me permite, señor presidente, voy a aclarar la inquietud del señor diputado Falabella.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Falú.

**Sr. Falú.** — Pienso que esa inquietud se ve satisfecha por la redacción del artículo 10 cuando en el inciso b) establece el requisito de que «apliquen tecnología creada o a desarrollar en el país». No es necesario, entonces, determinar específicamente que debe tratarse de institutos científicos o técnicos.

**Sr. Falabella.** — El concepto es muy genérico, señor diputado, por lo que creo conveniente agregar a continuación de la parte final del inciso b) lo siguiente: «... e instalen laboratorios o institutos de estudio conectados con las necesidades científicas o técnicas del país».

**Sr. Presidente** (Busacca). — ¿Acepta la comisión la modificación propuesta por el señor diputado Falabella?

**Sr. Palacio Deheza.** — No, señor presidente, porque eso es materia de otra ley.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Se va a votar el artículo 10 con la redacción que tiene en el despacho de comisión.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Busacca).** — El señor diputado Moral ha propuesto agregar como artículo 10 bis el texto que se leerá por Secretaría.

**Sr. Secretario (Rocamora).** — El artículo 10 bis, propuesto por el señor diputado Moral, dice:

Se autorizarán automáticamente las inversiones extranjeras que cumplan las siguientes condiciones:

- a) Exporten más del 66 por ciento de su producción o facturen el doble por ventas externas que por ventas dentro del país;
- b) Constituyan una reserva especial sobre sus ganancias que sea atribuida en un 50 por ciento a su personal, o a su personal y sus proveedores o clientes, y en el otro 50 por ciento a los Estados provinciales donde se encuentre radicada la empresa. Esta reserva deberá permitir la conversión de la empresa extranjera en empresa nacional en el término de 25 años.

Las empresas que se radiquen dentro de las condiciones de este artículo se denominarán empresas conjuntas y podrán acogerse a los regímenes de promoción como si fueran nacionales.

**Sr. Presidente (Busacca).** — ¿Acepta la comisión la modificación de que se ha dado lectura por Secretaría?

**Sr. Palacio Deheza.** — No, señor presidente.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 11.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 12.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 13.

Por Secretaría se va a dar lectura de dos modificaciones propuestas.

**Sr. Secretario (Rocamora).** — El señor diputado Moral propone el siguiente texto para el artículo 13:

Los inversores extranjeros podrán remesar sus utilidades al exterior en la proporción que se fije en el convenio de radicación y de acuerdo con los resultados de la licitación a que se refiere el artículo 4º. El monto de esa transferencia no podrá ser mayor a la tasa del 12,5 %, o la que exceda en 4 puntos a la del interés que se pague, considerándose para determinar el tope la tasa superior resultante de ambos supuestos. Este tope podría elevarse de acuerdo con la mecánica que se establece en el artículo siguiente. No podrá efectuarse la transferencia si existen deudas exigibles de carácter fiscal o previsional.

El señor diputado Alvarez Guerrero propone agregar al final del artículo 13 el siguiente texto:

A los efectos del cómputo de las utilidades remitidas se incluirán los pagos efectuados entre casa cen-

tral o casa matriz y sucursal o subsidiaria en la Argentina, o entre inversor extranjero y empresa en la que tenga inversión radicada en el país, en concepto de regalías u otros pagos por uso de tecnologías.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Tiene la palabra el señor diputado Balestra.

**Sr. Balestra.** — De acuerdo con el pedido que formulamos oportunamente al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y de conformidad con la información recibida, proponemos que se elimine la mención concreta a la tasa del 12,5 por ciento, que va a resultar exagerada, y que se remita a una ley especial el monto de las utilidades que podrán ser remesadas al exterior.

**Sr. Presidente (Busacca).** — ¿Acepta la comisión las modificaciones propuestas respecto del artículo 13?

**Sr. Palacio Deheza.** — No, señor presidente, la comisión no las acepta.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Se va a votar el artículo 13 del despacho de la comisión.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Busacca).** — El señor diputado Moral ha propuesto la incorporación de un artículo 13 bis, que se va a leer por Secretaría.

**Sr. Secretario (Rocamora).** — Dice así:

El tope a que se refiere el artículo anterior podrá elevarse en función del aporte neto que la empresa extranjera haga con sus exportaciones. Para ello se restarán del monto de las exportaciones de la empresa durante cada año calendario las importaciones hechas directa o indirectamente para la empresa, así como los pagos al exterior que hubiere hecho por cualquier otro concepto, incluidas las remesas de utilidades y repatriación de capitales. Si el saldo es positivo, la empresa estará autorizada a remesar hasta la mitad de ese saldo por encima del tope señalado en el artículo anterior.

**Sr. Presidente (Busacca).** — ¿Acepta la comisión el texto del artículo 13 bis propuesto por el señor diputado Moral?

**Sr. Palacio Deheza.** — No, señor presidente.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 14.

Tiene la palabra el señor diputado Balestra.

**Sr. Balestra.** — En el artículo 14 debe suprimirse el último párrafo, que dice: «Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos precedentes los inversores podrán reinvertir en la misma empresa, sin autorización previa y con la sola condición de su registro, sus utilidades anuales hasta el límite del cinco por ciento (5 %) del monto de la inversión autorizada.»

La reinversión debe ser con autorización previa porque aunque el porcentaje sea bajo el monto puede resultar cuantioso, y es peligroso no pedir autorización previa.

**Sr. Presidente (Busacca).** — ¿Acepta la comisión la modificación que propone el señor diputado Balestra?

**Sr. Palacio Deheza.** — Sí, la acepta, porque está dentro del espíritu de la ley.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Se va a votar el artículo 14 del despacho, con la modificación aceptada por la comisión.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 15.

Tiene la palabra el señor diputado Balestra.

**Sr. Balestra.** — Así como en el artículo anterior propusimos la supresión de la falta de autorización previa, en este artículo no tiene ningún sentido exigir la conformidad de la autoridad de aplicación para reinvertir utilidades que van a quedar nacionalizadas. Si no va a haber transferencia de divisas o remesas de capital al exterior, no tiene ningún sentido tal conformidad, cuando esas utilidades van a quedar radicadas en el país.

Entiendo que debe ser suprimida la parte final del artículo 15, donde dice «previa conformidad de la autoridad de aplicación».

**Sr. Presidente (Busacca)** — Por Secretaría se va a leer otra modificación propuesta a este artículo.

**Sr. Secretario (Rocamora).** — El señor diputado Rabanal propone agregar la siguiente frase:

...no pudiendo destinarse a los sectores económicos enumerados en el artículo 6º, inciso c) de esta ley.

**Sr. Rabanal.** — Es lo que fue aceptado por el señor diputado Palacio Deheza.

**Sr. Presidente (Busacca).** — ¿La comisión acepta las modificaciones propuestas?

**Sr. Palacio Deheza.** — No acepta la modificación propuesta por el señor diputado Balestra, pero sí la formulada por el señor diputado Rabanal.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Se va a votar el artículo 15 con la modificación aceptada por la comisión.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 16.

**Sr. Palacio Deheza.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Tiene la palabra el señor diputado Palacio Deheza.

**Sr. Palacio Deheza.** — Como parte final del artículo 16 debe agregarse: «a juicio del Banco Central de la República Argentina».

**Sr. Balestra.** — Debe leerse el artículo íntegramente.

**Sr. Palacio Deheza.** — El artículo 16 quedaría en esta forma: «En situación crítica de la balanza de pagos, a juicio del Banco Central de la República Argentina, las repatriaciones de capital y transferencias de utilidades, podrán ser diferidas mientras aquella situación subsista, sin

que ello afecte los derechos a tales recursos, a juicio del Banco Central de la República Argentina».

**Sr. Balestra.** — No hace falta decir dos veces «a juicio del Banco Central».

**Sr. Falú.** — Pienso que el artículo del despacho está perfectamente redactado y que el agregado que propone el señor diputado Palacio Deheza sería redundante. Si el diputado Palacio Deheza lo acepta, podríamos votar el artículo tal cual está en el dictamen.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Para que los señores diputados Balestra, Falú y Palacio Deheza unifiquen el criterio a seguir en la redacción del artículo, se va a pasar a un breve cuarto intermedio, permaneciendo los señores diputados en las bancas.

—Se pasa a cuarto intermedio.

—Luego de unos instantes:

**Sr. Presidente (Busacca).** — Continúa la sesión. Tiene la palabra el señor diputado Palacio Deheza.

**Sr. Palacio Deheza.** — Hemos aunado criterio, señor presidente.

En este artículo 16 se dan dos casos: la situación crítica de la balanza de pagos y la transferencia de utilidades diferidas mientras aquella situación subsista, sin que ello afecte los derechos a tales recursos. El Banco Central pidió que se incluyera en el segundo supuesto su facultad de discernir ese aspecto del artículo. Hemos aunado criterios, llegando al siguiente agregado: «en todos los casos a juicio del Banco Central de la República Argentina», que iría como parte final del artículo.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Ruego al señor diputado que dé lectura al artículo con el agregado aceptado por la comisión.

**Sr. Palacio Deheza.** — El artículo 16 queda así: «En situación crítica de la balanza de pagos, las repatriaciones de capital y transferencia de utilidades podrán ser diferidas mientras aquella situación subsista, sin que ello afecte los derechos a tales remesas, en todos los casos a juicio del Banco Central de la República Argentina».

**Sr. Presidente (Busacca).** — Se va a votar el artículo 16, de acuerdo con el texto leído por el señor diputado Palacio Deheza.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 17.

Tiene la palabra el señor diputado Palacio Deheza.

**Sr. Palacio Deheza.** — Como frase final del artículo se agrega lo siguiente: «salvo los regímenes financieros de promoción de carácter especial que el Banco Central de la República Argentina declare también aplicable a las empresas comprendidas en esta ley».

**Sr. Presidente** (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Balestra.

**Sr. Balestra.** — Señor presidente: como es tanto o más importante el endeudamiento con las empresas domiciliadas en el extranjero que el que se pueda tener con personas domiciliadas en el país, la primera parte del artículo debe concluir después de la palabra «privado»; es decir que se eliminaría «domiciliadas en el país».

**Sr. Presidente** (Busacca). — ¿La comisión acepta la modificación propuesta por el señor diputado Balestra?

**Sr. Palacio Deheza.** — Sí, señor presidente.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Por Secretaría se dará lectura a una propuesta del señor diputado Moral.

**Sr. Secretario** (Rocamora). — Dice así:

Artículo 17. — Las empresas e inversores extranjeros no podrán tener acceso a créditos subsidiados por la banca y entidades financieras existentes en el país. Para ello el Banco Central fijará periódicamente la tasa de interés real que habrán de pagar las empresas e inversionistas extranjeros, los que por otra parte actualizarán mensualmente el saldo de los préstamos recibidos por el índice que, de acuerdo con el Banco Central, represente mejor el proceso inflacionario.

**Sr. Presidente** (Busacca). — ¿Acepta la comisión la modificación propuesta?

**Sr. Palacio Deheza.** — No, señor presidente.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Se va a votar el artículo 17 con la modificación propuesta por el señor diputado Balestra y aceptada por la comisión, y con el agregado, como frase final del artículo, del texto leído por el señor diputado Palacio Deheza, que no ha sido observado.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Busacca). — En consideración el artículo 18.

Por Secretaría se dará lectura de una modificación propuesta por el señor diputado Moral en su dictamen de minoría.

**Sr. Secretario** (Rocamora). — (*Leyendo*):

En ningún caso podrá otorgarse al inversor extranjero tratamiento más favorable que el que se otorgue a inversores nacionales.

**Sr. Presidente** (Busacca). — ¿La comisión acepta la modificación propuesta?

**Sr. Palacio Deheza.** — No, señor presidente.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Se va a votar el artículo 18.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Busacca). — En consideración el artículo 19.

Tiene la palabra el señor diputado Balestra.

**Sr. Balestra.** — Debería agregarse «en materias ajenas a los beneficios de esta ley». Observe la comisión que esta ley da a los inversores

extranjeros un trato fundamentalmente distinto que a los inversores nacionales, por cuanto solamente el inversor extranjero acreditado como tal es el que puede repatriar y remesar; o sea que hay que pensar en que un trato igualitario debe ser materia ajena a los beneficios de esta ley, por razones de técnica legislativa.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Por Secretaría se va a dar cuenta de otra modificación propuesta.

**Sr. Secretario** (Rocamora). — El señor diputado Moral propone lo siguiente, según el dictamen de minoría que subscribe:

Artículo 19. —...

a) Sujetarse a las normas de esta ley y solicitar su registro como tales, quedando en consecuencia sometidos a su régimen (se suprime el resto);

b) Continuar...

**Sr. Palacio Deheza.** — La comisión no acepta ninguna de las dos modificaciones propuestas.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Se va a votar el artículo 19.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Busacca). — En consideración el artículo 20.

Hay una observación del señor diputado Falabella, de la que se dará cuenta por Secretaría.

**Sr. Secretario** (Rocamora). — El señor diputado Falabella propone agregar al texto del artículo 20 la siguiente prescripción:

Las radicaciones de capital extranjero anteriores a la sanción de esta ley que se hallen directa o indirectamente invertidas en los sectores del artículo 6º, inciso c), subincisos 1 y 4, podrán ser intervenidas por la autoridad de aplicación, la que determinará en su caso seguidamente la conveniencia y procedencia de su nacionalización.

**Sr. Palacio Deheza.** — La comisión no acepta ese agregado.

**Sr. Falabella.** — Existe una confusión al respecto, señor presidente, pues ya expresamente en el debate de ayer y en el de hoy quedó convenido aceptar esta propuesta.

**Sr. Presidente** (Busacca). — La Presidencia invita a pasar a un breve cuarto intermedio en las bancas, a fin de acordar criterio respecto de la modificación propuesta.

—Se pasa a cuarto intermedio.

—Luego de unos instantes:

**Sr. Presidente** (Busacca). — Continúa la sesión. Tiene la palabra el señor diputado Palacio Deheza.

**Sr. Palacio Deheza.** — Se ha arribado a un acuerdo, señor presidente. El agregado al artículo 20, que acepta la comisión, queda redactado

de la siguiente manera: «Las radicaciones de capital extranjero, anteriores a la sanción de esta ley, que se hallen directa o indirectamente invertidas en los sectores del artículo 6º, inciso c), subincisos 1 y 4, podrán ser intervenidas por la autoridad de aplicación, la que determinará, en su caso, seguidamente la procedencia o conveniencia de su nacionalización o expropiación por el Congreso de la Nación».

**Sr. Rabanal.** — Señor presidente: yo también había propuesto que en la redacción de que se acaba de dar cuenta, se incluyera el subinciso 2 del inciso c) del artículo 6º. También solicité la inclusión de los subincisos 1 y 4, que ahora ha aceptado la comisión.

**Sr. Presidente (Busacca).** — El señor diputado Palacio Deheza ha aceptado las inclusiones propuestas por el señor diputado Falabella; ahora debe responder acerca de las modificaciones propuestas por el señor diputado Rabanal.

**Sr. Palacio Deheza.** — No se aceptan, señor presidente.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Se va a votar el artículo 20, con el agregado aceptado por la comisión.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 21.

Por secretaría se dará lectura de una propuesta.

**Sr. Secretario (Rocamora).** — El señor diputado Moral propone la supresión del artículo 21.

**Sr. Presidente (Busacca).** — ¿Acepta la comisión?

**Sr. Palacio Deheza.** — No, señor presidente.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Se va a votar el artículo 21.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 22.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 23.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 24.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 25.

Por Secretaría se va a dar lectura de una propuesta del señor diputado Hueyo.

**Sr. Secretario (Rocamora).** — El señor diputado Hueyo propone que en el inciso b) del artículo 25, después de la palabra «monto», se

agregue: «de las utilidades a que se refiere el artículo 13 y, si no las hubiere, del capital repatriable...», continuando sin modificaciones hasta el final del inciso.

**Sr. Hueyo.** — Si me permite el señor presidente, deseo aclarar que si no se acepta el agregado propuesto, aquellos que no efectúen remesas de utilidades tendrán que esperar hasta la repatriación del capital.

**Sr. Presidente (Busacca).** — ¿Acepta la comisión?

**Sr. Palacio Deheza.** — No, señor presidente.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Se va a votar el artículo 25.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 26.

Tiene la palabra el señor diputado Balestra.

**Sr. Balestra.** — Simplemente para formular una observación.

Entiendo que en lugar de «casa matriz y filiales o subsidiarias de una misma empresa extranjera», debe decir: «créditos entre inversores extranjeros y empresas locales de una misma empresa extranjera...».

Esta observación la formulo en la inteligencia de que «casa matriz y filiales o subsidiarias» no son términos utilizados en nuestro régimen jurídico, ni en el derecho internacional privado.

**Sr. Presidente (Busacca).** — ¿Acepta la comisión?

**Sr. Palacio Deheza.** — No, señor presidente.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Se va a votar el artículo 26 (1).

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 27.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 28.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 29.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 30.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

(1) El texto de este artículo figura en la sanción de la Honorable Cámara con la redacción aprobada en la reunión del día 5 de agosto de 1973 de la presente sesión ordinaria especial.



**Sr. Presidente** (Busacca). — En consideración el artículo 31.

Tiene la palabra el señor diputado Balestra.

**Sr. Balestra.** — En este artículo se han deslizado dos errores.

En primer lugar, disiento con la ubicación de esta cláusula. Nace con el convenio Saab-Scania, en lo que se refiere al principio de la extensión de la responsabilidad. Dicha extensión no es una penalidad y, por lo tanto, no debe figurar en el capítulo V, referente a las penalidades, dado que presenta una imagen equivocada con relación al espíritu de la ley.

En segundo lugar, el artículo está mal redactado, puesto que su correcta redacción sería la siguiente: «La responsabilidad emergente de las obligaciones contraídas en el contrato de radicación por una empresa local y un inversor extranjero será asumida en forma conjunta y solidaria por ambos».

Con esto se pretende que el inversor extranjero asuma en forma conjunta y solidaria con la empresa local, receptora de la inversión, las obligaciones contenidas en el convenio; y habría que agregar: «en proporción al monto del aporte efectivo de capital», por tratarse de una ley genérica.

**Sr. Presidente** (Busacca). — ¿Cuál es la modificación concreta que propone, señor diputado?

**Sr. Balestra.** — En primer lugar, solicito que el artículo de referencia no figure en el capítulo de las penalidades. En segundo término, propongo que el texto de este artículo sea el siguiente: «La responsabilidad emergente de las obligaciones contraídas en el contrato de radicación será asumida en forma conjunta y solidaria por la empresa local y el inversor extranjero y en proporción al monto de su inversión».

**Sr. Presidente** (Busacca). — ¿Acepta la comisión las modificaciones propuestas?

**Sr. Palacio Deheza.** — Señor presidente: la palabra «Penalidades» que sigue inmediatamente después del título «Disposiciones finales», ha quedado debidamente interpretada en el cuerpo de esta ley, atento a que, por una valiosa sugerencia del señor diputado Catalano, todo el cuerpo de sanciones va a ser encarado de manera especial dentro del Código Penal.

La comisión, por mi intermedio, acepta que sea testada la palabra «penalidades» que en el despacho figura como subtítulo, y no así la modificación que propone el señor diputado Balestra al artículo 31.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Se va a votar el artículo 31 con la modificación aceptada por la comisión.

—Resultado afirmativa.

**Sr. Presidente** (Busacca). — En consideración el artículo 32.

Se va a votar.

—Resultado afirmativa.

**Sr. Presidente** (Busacca). — En consideración el artículo 33.

Por Secretaría se dará lectura de una propuesta formulada por el señor diputado Moral.

**Sr. Secretario** (Rocamora). — Dice así:

Artículo 33. — Las empresas que habiendo en su momento sido nacionales, mediante el procedimiento de desnacionalización a que alude el artículo 6º incluido:

d) Estarán obligadas a convertirse en nacionales en el término de tres años a partir de la sanción de la presente ley.

**Sr. Presidente** (Busacca). — ¿Acepta la comisión?

**Sr. Palacio Deheza.** — No, señor presidente.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Se va a votar el artículo 33.

—Resultado afirmativa.

**Sr. Presidente** (Busacca). — En consideración el artículo 34.

Tiene la palabra el señor diputado Balestra.

**Sr. Balestra.** — Señor presidente: este artículo tiene una defectuosa redacción. El concepto de orden público no es resorte de los legisladores, sino que compete al Poder Judicial, que interpreta las leyes.

Sin embargo, esto no sería tan grave porque es una manera bastante frecuente de legislar. Lo que no parece ajustado a derecho es la expresión que dice: «El Estado declara que integra el concepto de orden público el principio de respeto a los compromisos estatales». Esto no agrega nada y menos cuando se establecen regímenes diferenciados entre las radicaciones anteriores y las que tendrán vigencia por esta ley.

Por lo tanto, propongo que se suprima el artículo.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Por Secretaría me informan que el señor diputado Moral ha propuesto también que se suprima el artículo 34.

¿Acepta la comisión?

**Sr. Palacio Deheza.** — Solicito, señor presidente, realizar un breve cuarto intermedio en nuestras bancas a fin de considerar las modificaciones que se formulan.

**Sr. Presidente.** — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente** (Busacca). — La Presidencia invita a los señores diputados a realizar un breve cuarto intermedio en sus bancas a fin de permitir aunar criterios sobre las modificaciones propuestas.

—Se pasa a cuarto intermedio.

—Luego de unos instantes:

**Sr. Presidente** (Busacca). — Continúa la sesión. Tiene la palabra el señor diputado Palacio Deheza.

**Sr. Palacio Deheza.** — Señor presidente: hemos intercambiado opiniones y entendemos que el Congreso de la Nación tiene facultades para interpretar auténticamente sus leyes. Por lo tanto, consideramos conveniente mantener en el artículo la expresión: «Esta ley es de orden público». Se acepta suprimir el resto del artículo, porque, como bien ha señalado el señor diputado Rabanal, será materia de una ley general sobre los compromisos estatales internacionales.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Se va a votar el artículo 34 en la forma indicada por el señor diputado Palacio Deheza.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Busacca). — En consideración el artículo 35

Tiene la palabra el señor diputado Balestra.

**Sr. Balestra.** — El artículo 35 debería limitarse a derogar la ley 19.151 y nos los decretos reglamentarios, fundamentalmente el decreto 7.473/72, porque si derogamos esta norma no va a tener sustento legal la obligación, que ya ha sido cumplida en su casi totalidad por las empresas extranjeras que quisieron acogerse a los beneficios de la ley, de inscribirse en el registro, y dejaríamos un vacío legal en los dos últimos años, lapso en el cual se han inscrito las inversiones extranjeras en dicho registro. Al carecer de obligación en tal sentido, convalidaríamos la actitud de quienes no se han inscrito, creando una situación injusta.

Por otra parte, los decretos no se derogan por ley; al derogarse la ley que sustenta al decreto, éste pierde vigencia, validez, eficacia.

Propongo concretamente que se elimine del artículo la referencia a la derogación de los decretos.

**Sr. Presidente** (Busacca). — ¿Cómo quedaría el artículo con la modificación que propone, señor diputado Balestra?

**Sr. Balestra.** — Quedaría así: «La presente ley rige en todo el territorio de la Nación y deroga las disposiciones de la llamada ley 19.151, así como toda otra norma que resulte incompatible con su vigencia». Y luego continuaría el artículo tal como está redactado en el despacho.

**Sr. Presidente** (Busacca). — ¿Acepta la comisión?

**Sr. Palacio Deheza.** — No, señor presidente.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Se va a votar el artículo 35, tal cual figura en el despacho de la mayoría.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Busacca). — En consideración el artículo 36.

Tiene la palabra el señor diputado Balestra.

**Sr. Balestra.** — Propongo que se agregue en el artículo 36 lo siguiente: «El proyecto que envíe el Poder Ejecutivo deberá contemplar como modo de inversión el aporte de bienes inmateriales y, así mismo, la prohibición de transferir al exterior cualquier suma en concepto de *royalties*, asistencia técnica, contraprestación tecnológica o regalías de la sociedad receptora de la inversión al inversor extranjero».

**Sr. Presidente** (Busacca). — ¿Acepta la comisión?

**Sr. Palacio Deheza.** — No, señor presidente.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Se va a votar el artículo 36.

—Resulta afirmativa.

—El artículo 37 es de forma.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Queda sancionado el proyecto de ley (1).

Se comunicará al Honorable Senado.

La Presidencia invita a pasar a cuarto intermedio hasta las 15, a fin de considerar el proyecto de ley sobre nacionalización de entidades bancarias.

—Se pasa a cuarto intermedio a las 13 y 5.

## 2

### NACIONALIZACION DE ENTIDADES BANCARIAS

—A las 15 y 55:

**Sr. Presidente** (Busacca). — Continúa la sesión.

Corresponde tratar el dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales y de Finanzas, en el proyecto de ley en revisión sobre nacionalización de entidades bancarias.

#### Dictamen de comisión en mayoría

Honorable Cámara:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el anteproyecto de dictamen formulado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Finanzas —especializadas— en el proyecto de ley venido en revisión sobre nacionalización de entidades bancarias; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.

Sala de la comisión, 1º de agosto de 1973.

Carlos Palacio Deheza. — Rodolfo Eduardo Desperbasques. — Agustín Alfredo Avila. — Manuel I. Cabana. — Juan Bautista Espeche. —

(1) Véase el texto de la sanción en el Apéndice.